

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“EL HÁBEAS CORPUS Y EL AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA
JUDICIAL DEL PROCESO COMÚN”**

Presentada por:

Br. María Roxana Alberca Yanayaco

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Línea de Investigación:

Legislación y Ciencias Políticas

**PIURA – PERÚ
2019**

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Yo: **MARÍA ROXANA ALBERCA YANAYACO** identificada con DNI N.º **48514176**, en la condición de Bachiller de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**, y domiciliada en **A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU MZ LL LOTE 20 – II ETAPA**, del Distrito, Provincia y Departamento de Piura, Celular: **926782681**, Email: **roxanaalberca1907@gmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N.º 411, del código Penal concordante con el Art. 32º de la Ley N.º 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



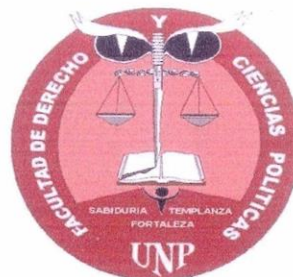
Piura, 19 de noviembre de 2019

DNI N.º 48514176

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“EL HÁBEAS CORPUS Y EL AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA
JUDICIAL DEL PROCESO COMÚN”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA


Bach. María Roxana Alberca Yanayaco
Ejecutor


Mg. Andrés Ernesto Villalta Pulache
Asesor

Línea de Investigación:

Legislación y Ciencias Políticas

PIURA – PERÚ
2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
097-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: "EL HABEAS CORPUS Y EL AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA JUDICIAL DEL PROCESO COMÚN" presentada por la Bachiller **ALBERCA YANAYACO MARIA ROXANA** para optar el Título Profesional de Abogado, con el asesoramiento del Mag. Andrés Ernesto Villalta Pulache; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA (X)

DESAPROBADA ()

Con la mención de:

SOBRESALLENTE

☒ En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.

☒ En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 14 de diciembre de 2019


DR. PEDRO GERMAN LIZANA BOBADILLA
PRESIDENTE


DR. JUAN WILBER CEBRIAN BARZOLA
SECRETARIO


DRA. ISIDORA CONCEPCIÓN ZAPATA PERICHE
VOCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



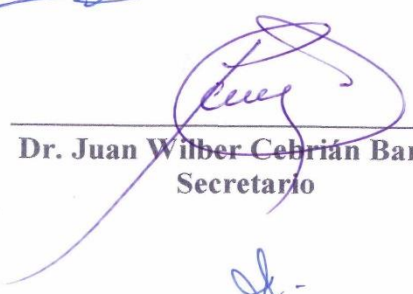
TESIS

**“EL HÁBEAS CORPUS Y EL AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA
JUDICIAL DEL PROCESO COMÚN”**


TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO



Dr. Pedro Germán Lizana Bobadilla
Presidente



Dr. Juan Wilber Cebrián Barzola
Secretario



Dra. Isidora Zapata Periche
Vocal

DEDICATORIA

*A Dios, por haberme
concedido la sabiduría,
fortaleza y paciencia en
este largo y satisfactorio
caminar.*

*A mis padres Arrecio y
Flor, por ser mi motor de
inspiración, lucha, soporte
y superación.*

*A mis hermanos, por su
apoyo y motivación
constante.*

AGRADECIMIENTO

A la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, que me acogió durante 7 años, y a su plana docente por los conocimientos impartidos.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I:	16
ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA	16
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA	16
1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	17
1.3 OBJETIVOS	17
1.3.1 Objetivo general:	17
1.3.2 Objetivo específico:	17
1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	18
1.4.1 Espacial:	18
1.4.2 Temporal:	18
1.4.3 Económica:	18
CAPÍTULO II	19
MARCO TEÓRICO	19
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	19
2.2 BASES TEÓRICAS	21
2.2.1 Hábeas Corpus:	21
2.2.2 Agotamiento de la instancia judicial	22
2.2.3 Proceso Común:	22
2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS	23
2.4 MARCO REFERENCIAL	24
2.4.1. Hábeas Corpus	24
2.4.1.1 Antecedentes históricos del Hábeas Corpus	24
2.4.1.2 Evolución Latinoamericana y Nacional	27
2.4.1.3 Regulación del Hábeas Corpus a nivel nacional e internacional	29
2.4.1.4 Concepto y finalidad del Hábeas Corpus	31
2.4.1.5 Características:	32
2.4.1.6 Derechos que protege el Hábeas Corpus	34
2.4.1.7 Requisitos de la demanda	35
2.4.1.8 Legitimación activa y pasiva	35

2.4.1.9 Juez competente	36
2.4.1.10 Procedencia e improcedencia del Hábeas Corpus	36
2.4.2. Tipos de hábeas corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional	39
2.4.2.1. Hábeas Corpus Reparador	39
2.4.2.2. Hábeas Corpus Restringido	39
2.4.2.3. Hábeas Corpus Correctivo:	39
2.4.2.4. Hábeas Corpus Preventivo	39
2.4.2.5. Hábeas Corpus Traslativo	40
2.4.2.6. Hábeas Corpus Instructivo	40
2.4.2.7. Hábeas Corpus Innovativo	40
2.4.2.8. Hábeas Corpus Conexo	41
2.4.2.9 Hábeas Corpus Excepcional.....	41
2.4.3. Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales:	42
2.4.3.1 Definición de resolución judicial	42
2.4.3.2 Aproximación conceptual	42
2.4.3.3 Alcances del proceso regular e irregular	42
2.4.3.4 Procedencia frente a infracciones procesales	43
2.4.3.5 Finalidad del Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales	45
2.4.3.6 Efectos de la sentencia del proceso de Hábeas Corpus	46
2.4.3.7 Hábeas Corpus vs Amparo Judicial.....	47
2.4.4 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración de derechos constitucionales de carácter procesal	48
2.4.4.1 Habeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho al debido proceso	48
2.4.4.2 Habeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho a la presunción de inocencia	49
2.4.4.3 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho de defensa	50
2.4.4.4 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho a la prueba	51
2.4.4.5 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones.....	52
2.4.5. Libertad individual	54
2.4.5.1. Una aproximación conceptual en torno a la libertad personal	54
2.4.5.2 Libertad personal como derecho y principio	54
2.4.5.3 Contenido constitucionalmente protegido.....	54

2.4.5.4 Condiciones para considerar su amenaza	55
2.4.5.5 Detención preventiva: presupuesto	55
2.4.5.7 Pena privativa de la libertad	56
2.6 HIPÓTESIS	57
2.6.1 Hipótesis general:	57
2.6.2. Hipótesis específica:	57
CAPÍTULO III	58
MARCO METODOLÓGICO	58
3.1 ENFOQUE:	58
3.2 DISEÑO:	58
3.3 NIVEL:	58
3.4 TIPO:	58
3.5 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:	58
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	59
CAPÍTULO IV	60
PROBANZA DE LA HIPÓTESIS	60
4.1 Probanza Jurídico – Doctrinal	60
CONCLUSIONES	68
RECOMENDACIONES	69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70
ANEXOS	73
APÉNDICE	76

ÍNDICE DE ANEXOS

1. Matriz Básica de Consistencia	74
--	----

ÍNDICE DE APÉNDICE

1. Convención Americana de Derechos Humanos.....	77
2. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, fondo.....	78
3. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, Excepciones Preliminares.....	78
4. Caso Godínez Cruz vs Honduras, Fondo.....	79
5. Caso Fairén Garbí y Solís Corrales vs Honduras, Excepciones Preliminares.....	80
6. Caso Loayza Tamayo vs Perú.....	80
7. Exp. 4107-2004-HC.....	81
8. Exo. 209-2004-HC.....	81

RESUMEN

Se debe tomar en cuenta en todo momento que, el Hábeas Corpus tutela la libertad individual como un derecho fundamental, cuya protección debe ser incondicional frente a situaciones arbitrarias. Por ello, se ha llegado a la conclusión que, si debe proceder el Hábeas Corpus sin agotar la instancia previa, en casos graves y de evidente ilegalidad, es decir, no debe ser exigible el requisito de “firmeza” cuando se desee acudir a la vía constitucional, haciendo uso del Hábeas Corpus para cuestionar una resolución judicial que desprenda una afectación no permisible a la libertad.

Dado que, se ha comprobado que el mencionado requisito ha actuado como barrera ante situaciones donde se exigía una solución inmediata, lo que ha ocasionado una afectación a los fines esenciales de la Constitución Peruana que se desenvuelve a través de la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y primacía.

Es en ese sentido, la finalidad que se desprende del presente trabajo de investigación; es la propuesta de incorporar en nuestro ordenamiento constitucional excepciones a la regla, incluyendo criterios que por regulación y jurisprudencia internacional han sido establecidas como tales, más aún si el Tribunal Constitucional ha mostrado a través de su jurisprudencia una postura favorable y adherida a lo señalado por las instancias internacionales.

Por otro lado, se hace hincapié que si bien; estas excepciones tienen un grado de aceptación por parte de nuestro máximo intérprete; sin embargo, estas no se encuentran incluidas en forma taxativa en nuestra Constitución; mucho menos dentro de nuestro Código Procesal Constitucional, siendo que, ello; no es óbice para que se solicite que las excepciones antes mencionadas, sean incluidas como parte de una modificatoria del artículo 4 del Código Procesal Constitucional Peruano.

PALABRAS CLAVE:

Hábeas Corpus, firmeza, libertad individual, Tribunal Constitucional, resolución judicial, Código Procesal Constitucional y Constitución Peruana.

ABSTRACT

It must be taken in mind at all times that, Habeas Corpus protect individual freedom as fundamental right, whose protection must be unconditional in front of arbitrary Situations. Therefore, it has been concluded that, if the Habeas Corpus must proceed without exhausting the previous instance, in serious cases and of obvious illegality, that is, the “firmness” requirement should not be enforceable when you want to go to the constitutional route, making use of the habeas corpus to question a judicial resolution that gives off an unacceptable effect on freedom.

Since, it has been proven that the aforementioned requirement has acted as a barrier to situations where an immediate solution was demanded. Which has caused an affectation to the essential purposes of the Peruvian constitution that is developed. Through the effective enforcement of constitutional rights and primacy.

On the other hand, it is emphasized that although, these exceptions have a degree of acceptance by our highest interpreter, however, these are not included in a taxative form in our constitution, much less within our constitutional procedural code, being that it, it is not an obstacle for requesting that the above-mentioned exceptions be included as part of a modification of article four of the Peruvian constitutional procedural code.

KEYWORDS:

Habeas corpus, firmness, individual freedom, constitutional court, judicial resolution, constitutional procedural code and Peruvian const

INTRODUCCIÓN

La tesis desarrolla el tema titulado “El Hábeas Corpus y el agotamiento de la instancia judicial del Proceso Común”, considerando que es el Hábeas Corpus el instrumento constitucional más antiguo y utilizado en nuestro país que tutela básicamente la libertad individual de los ciudadanos ante amenazas o actos arbitrarios e ilegales cometidos por funcionarios públicos, autoridades o personas. La problemática del tema comienza cuando el requisito de firmeza que exige el Código Procesal Constitucional Peruano para acudir a la vía constitucional a través del Hábeas Corpus resulta ser lesivo para la libertad individual de la persona.

Es en ese sentido que, se ha formulado como objetivo general: Analizar si debe proceder el Hábeas Corpus contra resolución judicial sin agotar la instancia judicial ordinaria cuando exista una grave y evidente vulneración a la libertad individual de la persona. Y como objetivo específico: Determinar si debe establecerse los casos en que la exigencia del agotamiento de la instancia judicial del instrumento constitucional del Hábeas Corpus contra resolución judicial podría atentar indebidamente contra la libertad individual de la persona.

Asimismo, se ha planteado como hipótesis general: Resulta pertinente y eficaz que el Hábeas Corpus proceda sin agotar la instancia judicial del proceso común en casos graves y de evidente ilegalidad, puesto que de lo contrario vulneraría la libertad individual. Y como hipótesis específica: Resulta posible que se deba establecer los casos en que la exigencia del agotamiento de la vía judicial del instrumento constitucional de Hábeas Corpus contra resolución judicial atentaría indebidamente la libertad individual de la persona. También es importante señalar que la metodología que se ha utilizado en este trabajo, es el método deductivo, analítico, histórico y dogmático.

Por otro lado, la justificación e importancia del mismo radica en la necesidad de descartar el agotamiento de la instancia judicial ordinaria para la procedencia del Hábeas Corpus contra resolución judicial, cuando exista una evidente vulneración de la libertad individual, por ello, propongo que la normativa elimine la exigencia desmesurada de requerirle al afectado que agote todas las vías pertinentes en el interior del proceso para que finalmente pueda acudir a la vía constitucional, en los siguientes casos: cuando de una resolución judicial se desprenda una vulneración manifiesta e indudable de la libertad individual, cuando se haga imposible la interposición de los recursos pertinentes al interior del proceso judicial donde se dictó la resolución que vulnera la libertad individual, cuando no se observen los plazos establecidos por ley o un plazo razonable para resolver los recursos interpuestos contra la resolución que vulnera la libertad individual y cuando a causa del agotamiento de la instancia judicial pudiera convertirse en irreparable la agresión a la libertad individual.

Es este sentido, esta investigación permite que los operadores jurídicos al momento de resolver sentencias de Hábeas Corpus no apliquen instantáneamente una interpretación restrictiva de la norma, sino más bien, tenga una interpretación amplia, dada la grave problemática que se viene suscitando con respecto al desmesurado estándar de requisito de procedibilidad exigido por la legislación nacional para con esta figura constitucional.

La presente se desarrolla en cuatro puntos: Capítulo I: contiene la descripción de la realidad problemática, justificación e importancia de la investigación, objetivos (tanto general como específico), y delimitación de la investigación, Capítulo II: contiene el marco teórico, bases teóricas, glosario de términos básicos y las hipótesis planteadas, Capítulo III: contiene el enfoque y diseño, sujetos de la Investigación, métodos y procedimientos, técnicas e instrumentos y aspectos éticos. Y Capítulo IV: contiene la probanza jurídico doctrinal. Finalmente, se tiene las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que ha arribado la presente investigación.

LA AUTORA

CAPÍTULO I:

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

Desde tiempos remotos, el Hábeas Corpus ha demostrado que se desenvuelve eficientemente al momento de proteger la libertad de las personas, por ello, nuestra Carta Magna del año 1993 la acogió como una figura constitucional, otorgándole las características de ser inmediata y eficaz. Luego, con la finalidad de complementarla y reforzarla se dispuso la vigencia del Código Procesal Constitucional, esto es mediante la Ley 28237 en el año 2004.

Es así que, mediante el Código Procesal Constitucional se estipula que para la procedencia del Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales se deba exigir un estricto requisito de procedencia, es decir, la norma indica que, para acudir a la vía constitucional, primero se debe agotar todas las vías previas que exista en el interior del proceso común. Es por esta razón que, la resolución judicial que se pretenda cuestionar debe tener la calidad de firmeza.

Ahora bien, si de una resolución judicial se desprende una evidente vulneración de la libertad individual, ¿Por qué esperar que dicha resolución adquiera la calidad de firme? ¿Por qué no acudir directamente a la vía constitucional a través del Hábeas Corpus?

Lo antes mencionado, produce que el ciudadano afectado tenga que esperar un plazo muchas veces excesivo para que su derecho vulnerado sea repuesto en la vía constitucional, lo cual evidencia un margen de desprotección no tolerable al tratarse de un derecho fundamental, como lo es, la libertad individual de la persona. Por ello, considero que el carácter de firmeza de una resolución judicial no debe ser exigible en los siguientes casos:

- ✓ Cuando se haga imposible la interposición de los recursos pertinentes al interior del proceso judicial donde se dictó la resolución que vulnera la libertad individual.
- ✓ Cuando no se observen los plazos establecidos por ley o un plazo razonable para resolver los recursos interpuestos contra la resolución que vulnera la libertad individual.
- ✓ Cuando el agotamiento de la instancia judicial pudiera convertirse en irreparable la agresión.
- ✓ Cuando de una resolución judicial sea evidente la vulneración manifiesta e indudable de la libertad individual.

Es importante señalar que el texto constitucional en la regulación del Hábeas Corpus no contempla este tipo de situaciones, que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos han adquirido la denominación de “excepciones al agotamiento de la vía previa”.

Ello, origina la materialización de muchas arbitrariedades ante una situación de vulneración del mencionado derecho, ya que si bien, se afirma que se encontraría de por medio evitar que el Hábeas Corpus se convierta en una especie de proceso especial para revisar cualquier resolución judicial, también se debería tener en cuenta que se está tratando de un derecho fundamental cuya protección debe ser incondicional, inmediata y eficiente frente a actos arbitrarios.

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta tesis se justifica en la necesidad de eliminar la exigencia de firmeza como requisito de procedibilidad del recurso constitucional del Hábeas Corpus contra resolución judicial, cuando existía una evidente vulneración de la libertad individual (ejemplificada en situaciones mencionadas líneas arriba), dado que, al exigirle dicha firmeza, significaba el transcurso de un tiempo determinado y, por ende, la demora de regresar rápidamente las cosas a la situación anterior a la ocurrencia de la agresión.

Del mismo modo, esta investigación concluye que con las propuestas esbozadas aquí, los operadores jurídicos, en este caso, los jueces de primera y segunda instancia, además de los miembros del Tribunal Constitucional, al momento de resolver sentencias de Hábeas Corpus no aplicarán instantáneamente una interpretación restrictiva de la norma, sino más bien, una interpretación amplia, dada la grave problemática que se suscitó con respecto al desmesurado estándar de requisito de procedibilidad exigido por la legislación nacional para con esta figura constitucional.

Dicho de otra manera, careció de argumentos que se le siguiera exigiendo al ciudadano una espera innecesaria hasta agotar los recursos que existían al interior de un proceso ordinario común, cuando el juez constitucional podía resolver de inmediato una vulneración manifiesta, indudable y grave de la libertad individual con la finalidad que el individuo pudiera recobrar en la brevedad posible su plena libertad.

En conclusión, considero pertinente señalar que, la presente investigación tendrá trascendencia en el ámbito social y jurídico, siendo cualquier ciudadano el único beneficiario cuando percibía que la ilegalidad o arbitrariedad vulneraba o amenazaba su libertad individual, considerando el daño irreparable que le causaba su vulneración de no ser resuelto con la inmediatez que amerita.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general:

Analizar si debe proceder el Hábeas Corpus contra resolución judicial sin agotar la instancia judicial ordinaria cuando exista una grave y evidente vulneración a la libertad individual de la persona.

1.3.2 Objetivo específico:

Determinar si debe establecerse los casos en que la exigencia del agotamiento de la instancia judicial del instrumento constitucional del Hábeas Corpus contra resolución judicial podría atentar indebidamente contra la libertad individual de la persona.

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Espacial:

La investigación se encuentra delimitada al análisis del segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, artículo que exige la calidad de firmeza para con esta institución jurídica.

1.4.2 Temporal:

En cuanto al tiempo, se hace referencia desde el momento que entró en vigencia la Ley N° 28237, esto fue el día 31 de noviembre de 2004 en el Diario Oficial “El Peruano”.

1.4.3 Económica:

Esta delimitación está supeditada a los recursos que pertenecieron a cuenta de la propia investigadora.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

(Miranda Ramos, 2017): En su tesis “El Hábeas Corpus contra las resoluciones judiciales en el Tribunal Constitucional”, tuvo como finalidad demostrar que los procesos de Hábeas Corpus en el Tribunal Constitucional tuvieron mínima eficacia durante el periodo de 2010-2012, tratándose como objetivos: analizar en qué medida el Tribunal Constitucional deniega los procesos de Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, y las razones por los que este órgano en un alto porcentaje declara infundadas e improcedentes los procesos de Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales.

Además, se formuló como hipótesis: los Procesos de Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales interpuestas en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el Tribunal Constitucional tienen mínima eficacia. Para ello, el autor analizó 351 sentencias de Hábeas Corpus que constituye la muestra representativa de los casos resueltos y publicados por el Tribunal Constitucional en su página web durante los años 2010 a 2012. Siendo que, se obtuvo como resultado que las sentencias de Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales al ser resueltas en definitiva por el Tribunal Constitucional, en el 93% son denegados.

Es así que, el autor propuso que el carácter firme de la resolución que vulnera la tutela procesal efectiva y la libertad personal no debería ser exigible en caso de que la vulneración sea manifiesta, así como analizar con sumo cuidado los criterios de procedencia de Hábeas Corpus de los artículos 2º y 4º del Código Procesal Constitucional, y las causales de improcedencia del artículo 5º del citado Código.

(Sulca, 2018): En su tesis “El Hábeas Corpus: Protección jurídica a la libertad individual y derechos conexos en las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional 2014”, siendo su finalidad el poder demostrar el gran porcentaje de los procesos de Hábeas Corpus que llegan al Tribunal Constitucional terminan por ser declarados Improcedentes o Infundados porque se presentan sin tener conocimiento de las causales de improcedencia o infundada, así como que derechos constitucionales y conexos se está desprotegiendo.

Esta investigación se encuentra justificada porque va a contribuir y permitir que el entendido en derecho acreciente y/o fortalezca sus conocimientos jurídicos, y que los ciudadanos conozcan sus derechos constitucionales y el procedimiento a realizar para interponer el Hábeas Corpus en el momento y modo oportuno. El método que se utilizó en ese trabajo de investigación fue el dogmático, obteniendo como resultado que el Tribunal Constitucional en sus sentencias si desprotege la libertad y derechos constitucionales conexos.

(Colongos Valqui, 2018): En su tesis “Causas jurídicas que generan la declaración de improcedencia a las demandas de Hábeas Corpus en los Juzgados de Investigación Preparatoria y Unipersonales de Chachapoyas 2015-2016”.

Sostuvo que nuestro Código Procesal Constitucional en su artículo 5 exige un plexo de causales de improcedencia; de las cuales solamente algunas son invocadas por nuestros magistrados, aunado a ello, existe el desconocimiento de estas causales por parte del recurrente y de los abogados para poder evitar que sus demandas sean declaradas improcedentes.

Por ello, la autora recomendó a los abogados realizar diplomados respecto de esta garantía, y organizar constantes charlas al público en general para que conozcan de ella, el procedimiento que se sigue, sus causales de improcedencia y los derechos que esta protege, de tal forma que no vean amenazada su libertad e insatisfecha su demanda.

2.2 BASES TEÓRICAS.

2.2.1 Hábeas Corpus:

Los orígenes del Hábeas Corpus se remontan a Inglaterra, donde se le conoce como <<high prerogative writ>> y es considerado un importante remedio en relación con acciones públicas o privadas para proteger la libertad individual. Originalmente, este *writ* sirvió para que una corte del *common law* pueda traer a su presencia a persona que deberían comparecer en un juicio.

En los siglos xv y xvi, las cortes del King's Bench y *common law* usaron el writ para imponerse sobre cortes rivales y para liberar prisioneros de esas cortes que se habían excedido en sus jurisdicciones (competencias). En el siglo XVII, parlamentarios usaron el writ para revisar arrestos arbitrarios ordenados por el rey o el consejo del rey. Según el jurista García Belaunde, (1997).

En 1640 se aprobó la ley para que, en casos de detención, las cortes del Common Law investigasen la verdadera causa del arresto o privación de libertad. La esencia del Hábeas Corpus era que una corte pudiera determinar la legalidad de una detención. Con posterioridad a esta ley de 1640, se sancionaron las de 1679, 1816 y 1862; ellas no crearon nada nuevo, sino que se limitaron a perfeccionar lo ya existente.

Así, la de 1679 prohibía la evasión del Hábeas Corpus trasladando prisioneros fuera de la jurisdicción de las cortes inglesas (por ejemplo, a Escocia a Irlanda). La de 1816 dio poderes al Juez en los casos civiles para investigar en relación con el retorno del detenido (o sea, el informe solicitado en el writ emitido a solicitud del agraviado).

La de 1862 estableció que el writ no sería empleado fuera de Inglaterra, en ningún dominio o colonia en donde existiesen cortes que garanticen el uso del Hábeas Corpus. Según el jurista García Belaunde, (1997)

Podemos mencionar también que nuestro Tribunal Constitucional ha expresado mediante sus sentencias aproximaciones conceptuales con respecto al Hábeas Corpus, citados en los fundamentos siguientes:

- ✓ “Si bien el Hábeas Corpus en su origen histórico surge como remedio contra aprehensiones ilegales, representando la defensa de aquello que los antiguos romanos denominaban *iusmovendi et ambulandi* o los anglosajones consignaba como *power of locomotion*, su desarrollo posterior lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que, si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él.

Su ámbito de acción es básicamente de resguardo y tutela de la libertad personal en su sentido lato. Incluso, en la actualidad algunas figuras del Hábeas Corpus abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar derechos de índole distinta.¹

- ✓ La Constitución (artículo 200, inciso 1) y el Código Procesal Constitucional (artículo 25, inciso 17), acogiendo una concepción amplia del proceso de Hábeas Corpus, han previsto su procedencia, tanto para la defensa de los derechos conexos con la libertad personal, como, especialmente, cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, respectivamente.

¹ STC Exp. N° 06936-3003-PHC, F.J.2

De ahí que se admita que también dentro de un proceso constitucional de Hábeas Corpus es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho fundamental a la libertad personal, según Rosas Alcántara, (2015).

2.2.2 Agotamiento de la instancia judicial

La convención Americana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un respectivo pronunciamiento sobre el punto en mención. Es importante mencionar que, nuestro Tribunal Constitucional también se ha adherido a este pronunciamiento.

2.2.3 Proceso Común:

El Proceso Común es aquel tramitado ante la justicia ordinaria. (Valletta, 2014).

Según (Cornejo y Quiroz, s.f), afirman que, para tratar del proceso común, primero se tiene que referir al Código de Procedimientos de 1940, donde en forma estricta no se trata del proceso común, sino que se refiere al proceso ordinario, mientras que el Código Procesal Peruano, publicado con el Decreto Legislativo N° 957 del 29 de julio de 2004, si se refiere en forma específica al proceso común.

Precisamente el proceso ordinario en el Código de Procedimientos Penales solo contaba con dos etapas, como es la Investigación y el Juicio o Juzgamiento, en cambio en el Nuevo Código Procesal se trata del proceso común con sus tres etapas, como lo es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. La estructura del proceso penal es parte esencial de la reforma. Tiene que ver con el diseño general del proceso, así como con el papel que se asigna a los sujetos procesales, con la afirmación y respeto de los derechos fundamentales, y con una nueva concepción de la potestad punitiva del Estado.

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS

- ✓ Resolución judicial: Cualquiera de las decisiones, desde las de mero trámite hasta la sentencia definitiva, que dicta un juez o tribunal en causa contenciosa o en expediente de jurisdicción voluntaria. Ossorio, (2010).
- ✓ Resolución judicial firme: Es aquella sobre la cual se han interpuesto todos los medios impugnatorios que contempla la ley procesal, si los hay. En tal sentido, se trata de una resolución que o bien ha llegado a la máxima instancia revisora y ya no puede ser cuestionada dentro del proceso ordinario, o una respecto de la cual no se ha previsto medios impugnatorios. (G.J), 2008
- ✓ Libertad individual: Es la que permite disponer de la propia persona según los dictados o inclinaciones de nuestra voluntad o naturaleza, a cubierto de presiones, amenazas, coacciones y de todo otro influjo que violenta la espontánea decisión del individuo. Constitucionalmente se traduce en las garantías sobre detención, juzgamiento y sentencia, sobre todo la audiencia del acusado y su defensa en juicio, según Ossorio, (2010).
- ✓ Persona: El hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones, según Ossorio, (2010).
- ✓ Tribunal Constitucional: Es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.²
- ✓ Constitución Política del Perú: Norma fundamental de la base jurídica nacional, según Ossorio, (2010).
- ✓ Código Procesal Constitucional: Código que regula los procesos constitucionales de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data, Cumplimiento, Inconstitucionalidad, Acción popular y los conflictos de competencia, previstos en los artículos 200 y 202 inciso 3 de la Constitución.³
- ✓ Arbitrariedad: Acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal, inspirado sólo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, según Ossorio, (2010).
- ✓ Ilegalidad: Todo aquello que es contrario a la Ley, según Ossorio, (2010).
- ✓ Tutelar: Se dice de lo que ampara o protege, según Ossorio, (2010).

² Artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

³ Título Preliminar del Código Procesal Constitucional Peruano

2.4 MARCO REFERENCIAL

2.4.1. Hábeas Corpus

2.4.1.1 Antecedentes históricos del Hábeas Corpus

A. En Inglaterra:

El Hábeas Corpus nació en Inglaterra en fecha imprecisa. Sin embargo, empieza actuar desde el siglo XIII, según el jurista García, (2001).

El sistema inglés fue prodigio de declaraciones de derechos. La más antigua, es la carta de Libertades que Enrique I adoptó en el año 1100, que se refiere a casos concretos, aunque no contiene reporte alguno sobre la libertad corporal. El Decreto de Clarendon de 1166, parece ser el origen del jurado compuesto por doce miembros, considerando como las más importantes garantías de la administración de justicia, según el jurista (Belaunde, 1979).

Tiempo después, más precisamente en el siglo XII, el pueblo inglés a través de luchas logró establecer, en el año 1215, lo que se llamó la “Carta Magna,” figura para hacerle frente a los caprichos de los monarcas de la época. Con dicha Carta Magna o Declaración de Derechos proclamada por el Rey Juan Sin Tierra, el 15 de junio de 1215, se establecía que los súbditos no debían sufrir prisión injusta (Velásquez, 2007).

Asimismo, en 1640 aparece el Acta de Hábeas Corpus de 1679, el cual se refería al derecho a la no detención de los súbditos ingleses. El parlamento se puso como propósito firme el de romper con los obstáculos interpuestos a esta garantía de libertad, para que el *writ* (escrito) tuviera máxima eficacia. Así pasó a tener una existencia real. Su ámbito de competencia se refería a los casos penales (...).

En 1816, tras un nuevo Hábeas Corpus *act* se extiende el *writ* (escrito) de Hábeas Corpus a supuestos no criminales, es decir, a asuntos de naturaleza jurídico – privada, estableciendo avances de índole normativo que protegen de forma parcial, el derecho a la libertad personal, según la autora Fuertes, (2007).

Se tuvo la creación de dos documentos importantes relacionados con esta figura constitucional, estos fueron:

✓ La Carta Magna Inglesa:

En 1215, los barones de Reino hicieron una petición al Rey Juan Sin Tierra, a fin de poner freno a sus actos arbitrarios. En uno de sus artículos (Nro 29) se decía: “*No se podrá apresar corporalmente al hombre libre; sin el juicio de sus pares o sin el concurso de las leyes de la tierra; el hombre libre no podrá ser apresado ni despojado de sus tierras ni declarado fuera de la ley (...)*”.

El Rey Juan Sin Tierra, tuvo que acceder a firmar lo que es conocido como “*Magna carta Libertatum, seu concordia inter regem johanem et barones pro concessione libertatum ecclesiae et regnie Anglaises*”, un 15 de junio de 1215, en la pequeña isla de Runnymede, en medio del Río Támesis, no muy lejos de Londres, tal como dice (Cooper, 1965).

(....) La carta previó una serie de libertades, con respecto a las actividades del hombre libre en diversos aspectos relacionados con el comercio, los impuestos, etc. Este documento es el punto de partida de todo el constitucionalismo moderno, tuvo una gran repercusión y aunque varias veces fue violado por el Rey Juan, y suspendido otras veces violado por la corona inglesa (....) Belaunde, (1979).

(Xibras, 1957) Tiempo después, por ley de 1641 (...) se abolió la Cámara estrellada (...). Ahí se señaló que desde la Carta Magna existía una constante preocupación por parte de los reyes por defender al hombre de su libertad y prerrogativas.

No obstante, estas normas no habían sido observadas en algunas cortes, en especial la Cámara estrellada, estableciendo que cualquier persona que fuera detenida por cualquier corte que ejerciera la jurisdicción similar a la Star Chamber, o bajo el control del Rey, estaría protegido por (...) Hábeas Corpus y en tal caso la Corte debería decidir sobre la legalidad de detención en el plazo de tres días.

Posteriormente, el Parlamento aprobó la Ley de Hábeas Corpus de 1679 (...). Esta ley no trajo nada nuevo; fue más bien el perfeccionamiento procesal de una institución muy antigua, a tal extremo que se llegó a establecer penas y sanciones muy severas, a quien, juez o funcionario, se negase a su trámite sin buenas razones para ello. Belaunde, (1979).

✓ Bill of Rights (1689):

Aprobado 10 años después, que se conoce como “una ley que declara los derechos y libertades del súbdito y que dispone la sucesión de la corona en la cual, establecieron una serie de declaraciones para “que se reivindicuen y se afirmen sus antiguos derechos y libertades” proclamando la libertad de los súbditos de llevar peticiones al rey, especialmente que prohíbe a la corona suspender las leyes o su cumplimiento.

La última ley importante, en materia de Hábeas Corpus data el 1 de julio de 1816 que sirvió para perfeccionar la legislación anterior y dispuso que el writ de Hábeas Corpus sea utilizado no solamente en causas penales, sino para cualquier tipo de prisión indebida, cualquiera fuera su naturaleza.

B. En Grecia:

El Hábeas Corpus, como idea de la libertad, aparece por primera vez en la cultura griega, cuyos políticos, historiadores, literatos y filósofos, hicieron de ella algo fundamental para el desarrollo de la polis, aunque por limitaciones que tuvieron, sólo llegó a defender a clases económicas o socialmente dominantes.

Por otro lado, al valor casi sagrado que tenía la libertad entre los griegos, el pensamiento político tendió a exaltar en forma desproporcionada el papel del Estado, subordinando al individuo frente a aquel, aunque todo ello estaba envuelto en un contexto ético religioso que lo diferenciaba claramente de cualquier modelo contemporáneo. Belaunde, (1979).

C. En Roma:

La aparición del derecho romano significa el inicio de una protección jurídica de la libertad del hombre, pero siempre dentro de las limitaciones de la época.

Es cierto que, en Roma existió ciertas figuras como la *injus vocatio* que autorizaba a emplear la fuerza contra el deudor moroso y la *manus injectio*, según la cual si el condenado no pagaba la deuda, el acreedor podía conducirlo a su casa, encadenarlo – *in carcere privato* – y al término de 60 días venderlo como esclavo.

Luego, el concepto de la libertad se formaliza con la institución de los tribunos de la Plebe, quienes tenían la facultad de vetar las decisiones de los magistrados (...). Finalmente estos recursos tuvieron su culminación por así decirlo en el *interdicto de homine libero*, (...) que resume en la protección jurídica de la libertad”, según el jurista Belaunde, (1979).

D. Legislación Foral Española:

Según (Sánchez, 1961) señala que en España, la legislación más antigua es el fuero de León del año 1188, que proclama la libertad como un derecho reconocido al individuo como fruto de un pacto civil entre el reino y don Alonso IX.

Luego, aparece (...) el denominado “recurso de manifestación de personas” del reino de Aragón de 1428, y en las referencias que sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales se contienen en el fuero de Vizcaya de 1527 (...), según (Fuertes , 2007).

(López de Haro y Linares, 1956) afirma que la manifestación de las personas que funcionó en el Reyno de Aragón “consistía en apartar a la autoridad de su acción contra la persona, previniendo toda arbitrariedad o tiranía en favor de los aragoneses. Se demandaba por quien, preso o detenido, sin proceso o por juez incompetente , recurría a la justicia contra la fuerza de que era víctima.

Y en su virtud, en ciertos casos, quedaba libre un día, aunque en lugar seguro, y si examinado el proceso, debía seguirse, el presunto reo era custodiado en la cárcel de los manifestados, donde al amparo de la justicia, esperaba sin sufrir violencia el fallo que recayera (...). Es decir la manifestación era una de las libertades que gozaba el Reyno, como recurso contra todo exceso de poder (...).

Hay que mencionar por último el fuero de Vizcaya, emanado de la Asambleas General del Reyno reunida el 5 de abril de 1526. Este fuero era un reconocimiento por escrito de privilegios, franquicias y libertades existentes o que por tal acuerdo fueron reconocidos (...) Belaunde, (1979).

E. Estados Unidos de Norteamérica:

Un documento de gran transcendencia en lo que respecta a las libertades, es la famosa Declaración de derechos, formulada por los representantes del buen pueblo de Virginia (...) el 12 de junio de 1776. Ahí se proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, (...) que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben ser separados y distintos (...)

(...) Luego de la declaración de la independencia (1776) se aprobó la Convención de Filadelfia (1787) (...). Una vez aprobada, la Constitución debía ser ratificada por los demás miembros (...) y luego se reunieron en un volumen titulado *The Federalist*. En el (Nº 84) hay una parte dedicada al Hábeas Corpus escrita por Hamilton, y en la que demuestra en contra de las críticas que en ese entonces se hacían.

Que la nueva Constitución contenía implícitamente una declaración de derechos y menciona como prueba de ello, la existencia del *writ de Hábeas Corpus*, señalando que esta era una medida de seguridad para proteger la libertad (...) Al igual que en Inglaterra, en los Estados Unidos se ha suspendido en diversas oportunidades el uso del Hábeas Corpus, entre ellas durante el gobierno del presidente Lincoln en 1861 (...) Belaunde, (1979).

F. Francia:

Los países del continente europeo, influenciados por Francia, han acogido en sus textos los derechos de libertad y otros análogos, pero no han implementado en sus respectivas constituciones un remedio procesal tan expeditivo como el Hábeas Corpus anglosajón. No se debe olvidar que dichos países tienen en sus respectivas legislaciones, medios para cautelar la libertad corporal de las personas. Aún más, cuentan con declaraciones de derechos que tienen su origen en la Revolución Francesa.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aceptada por el Rey el 5 de octubre de 1789. En ella, los representantes del pueblo francés “considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, resolvieron exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre.

Luego, fue aprobada una nueva Declaración por la Convención Nacional, el 23 de junio 1793 y puesta al frente de la Constitución del 24 de ese mismo mes y año. Esta Declaración no llegó nunca a estar en vigor. Una subsiguiente Constitución del año 1795, con la cual se instituyó el Directorio, fue también precedida por una Declaración de Derechos mucho más restringida que la 1793, aun²²que más se aproximaba a la de 1789. Siendo que como dato nuevo tenía una declaración de deberes, que por lo demás ya se encontraba implícita en anteriores declaraciones; citado por Belaunde, (1979).

2.4.1.2 Evolución Latinoamericana y Nacional

▪ A nivel de Latinoamérica

A. En Brasil:

El autor Pontes de Miranda (1972), señala que Brasil es el país que introduce por primera vez el Hábeas Corpus en 1830, mucho antes que fuera consagrado en los códigos de Livingston de 1837 (aplicados en Guatemala) o el Amparo en la Constitución de Yucatán (1814).

Ha tenido en ese país una evolución muy curiosa, pues sufrió diversas deformaciones, las que sólo se zanjaron en 1934, cuando fue creado – para la creación de los demás derechos- el famoso mandato de seguridad (mandato de seguridad). En Brasil procede en lo sustancial para proteger a quien sufre o pueda sufrir violencia o coacción ilegal en su libertad de ir y venir.

B. En Argentina:

(Bidart et al., 1994) señala que en Argentina el Hábeas Corpus es bastante antiguo, pues se menciona por primera vez en la ley N° 48 del año de 1863 y luego seguirá un camino ascendente y complejo, no obstante, el hábeas Corpus no se encontraba vigente en la Constitución de 1853; aun cuando sí estuvo expresamente en la Constitución peronista de 1949 derogada a la caída de Perón.

Pero ello, no ha obstado para su desarrollo legislativo, como tampoco para la creación Pretoriana del Amparo en 1957. En este país, el Hábeas Corpus se da de manera bastante clásica y vinculada con la libertad personal.

En síntesis, procede el Hábeas Corpus por arresto sin orden de autoridad, en el caso de leva sin servicio militar ordenado u obligatorio; por internación indebida en un nosocomio; entre

otros. En los últimos tiempos se ha utilizado en defensa de los presos, esto es, de las personas sentenciadas, pero a las cuales se les ha agravado su condición.

C. En Costa Rica:

(González y Armijo, 1994) indica que, en este país si bien existía el Hábeas Corpus desde tiempo atrás, al sancionarse en 1989 la Ley de jurisdicción constitucional y crearse dentro de la Corte Suprema una Sala Constitucional verdaderamente autónoma, ha creado un órgano especial dentro del Poder Judicial, pero con características afines al denominado modelo concentrado.

La Sala Constitucional interpretando extensivamente la ley de la materia, ha actuado no sólo en la libertad personal y su defensa sino que ha llegado incluso hasta intervenir en procesos penales en curso para marcar pautas de conducta a la magistratura, considerando que el Hábeas Corpus procede en cualquier procedimiento penal cuando no se respeta el debido proceso, entendiéndose por tal al juez regular, el derecho de defensa, el Principio de inocencia, el *indubio pro reo*, etc.

D. En México

Es el único país que teniendo un adecuado aparato protector de los derechos de la persona, carece sin embargo del Hábeas Corpus. Tiene desde 1841 a nivel local y luego desde 1841 y más en concreto desde 1857, el Amparo ha tenido una evolución sumamente compleja y curiosa y además con una velocidad vertiginosa por el enorme desarrollo jurisprudencial y legislativo de los últimos 50 años. Siendo que se ha considerado al Amparo como protector de la libertad corporal, integridad, deportación, etc. (Noriega, 1975).

E. En Guatemala

Los antecedentes más cercanos del Hábeas Corpus en Iberoamérica encontramos que “en el seno de la Cortes de Cádiz, en la cual el diputado suplente por Guatemala don Manuel de Llano, propuso “Que para precaver en parte los males que, tantos años han afligido a la nación, se nombre una comisión exclusivamente, se ocupe de redactar una ley al tenor de la de Hábeas Corpus que rige en Inglaterra, que asegure la libertad de los ciudadanos”.

La ley no fue aprobada nunca, sino fue trasladada y unificada conjuntamente con otros tópicos. De esta forma los constituyentes de la Constitución de Cádiz no incorporaron transcendentamente institución jurídica, según los autores (García y Hurtado, 1980).

▪ A nivel nacional:

El Hábeas Corpus estuvo presente en nuestro ordenamiento jurídico desde los inicios de nuestra vida republicana debido a que “tanto como San Martín y La Mar hicieron referencia de esta figura constitucional en los dispositivos legales que ellos promulgaron.

El general José de San Martín incluyó en el Estatuto Provisional del 8 de octubre de 1821 lo que sería la primera manifestación de las denominadas “garantías individuales”. Sin embargo, el Estatuto Provisional de octubre de 1822 promulgado por José La Mar, utiliza términos más

precisos, tendentes a cautelar la libertad individual. El antecedente normativo más concreto, es la ley del 21 de octubre de 1897.

Finalmente, se reglamentó el artículo 18 de la Constitución de 1860, que señalaba: “Nadie podrá ser arrestado sin mandato escrito de juez competente de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto *in tragan* delito, debiendo en todo caso ser puesto el arrestado dentro las 24 horas de disposición del Juzgado que corresponda”, teniendo una participación activa y trascendental para la aprobación de esta ley el diputado Mariano Cornejo, según lo mencionado por Velásquez, (2007).

Luego, el Hábeas Corpus es reconocido en la Ley N° 2223 expedida (...) el 10 de febrero de 1916, (...), la cual regulaba “la libertad provisional en los procesos penales y que estableció (...) “Todas las garantías contenidas en el Título IV de la Constitución del Estado, darán lugar a recursos destinados a amparar a los habitantes de la República que fueren amenazados en el goce de sus libertades (...)” García y Hurtado, (1980).

En la constitución de 1920, es donde existe por primera vez un reconocimiento constitucional del Hábeas Corpus. El Código de procedimiento en materia penal fue promulgado por Ley N° 4019, el 2 de enero de 1919, este cuerpo de leyes le llamó al Hábeas Corpus “recurso”. Posteriormente, el 23 de noviembre de 1939 fue promulgado el Código de Procedimientos Penales, el cual entró a regir desde 1940.

En adelante, la Constitución de 1993 también reconoció dentro de su normativa al “Hábeas Corpus”, el cual “tuvo como marco referente el Anteproyecto de la Comisión de Villarán. En este documento se mantuvo la idea de ampliar el Hábeas Corpus para la tutela de la libertad individual y de los demás derechos fundamentales”. (Eto, 2013).

Después existió promulgaciones sobre el Hábeas Corpus como la Ley N° 97083 del 24 de octubre de 1968, donde se tramitaba en la Sala Civil de turno, quien a su vez lo remitía al juez civil más antiguo del distrito judicial para que este solicite el informe escrito a la autoridad competente en el plazo de 8 días y luego sea elevado a la instancia superior con el fin de que se emita una resolución final (...).

Finalmente, fueron derogados los artículos del Código de Procedimientos Penales de 1940 y en su lugar entró en vigencia con fecha 7 de diciembre de 1982, la Ley N° 23506, la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, que además derogó al Decreto Ley N° 17083.

Luego en la asamblea constituyente que dio origen a la Constitución de 1979 se incorporó como garantía constitucional, el artículo 295, que señala “La acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual (...). En la actualidad está vigente en el Código Procesal Constitucional (...) (García, 2001).

2.4.1.3 Regulación del Hábeas Corpus a nivel nacional e internacional

- A nivel nacional
 - Constitución Política Peruana:

En Hábeas Corpus se encuentra previsto en la Constitución Política de 1993, la que establece en el numeral 1 de su artículo 200 lo siguiente: Artículo 200: “Son garantías constitucionales la acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”

Este dispositivo regula el ámbito de protección del proceso de Hábeas Corpus: el derecho a la libertad individual y los derechos constitucionales conexos a ella. En ese sentido La Constitución plantea de modo general, y a través de una redacción sencilla, los derechos que serán protegidos por este proceso constitucional conexos a ella.

Sin perjuicio del catálogo de derechos que integran el derecho a la libertad individual contenidos en el Código Procesal Constitucional, la norma fundamental nos brinda el marco general dentro del cual se desenvuelve este proceso- Asimismo, en el artículo 2 se reconocen varios de los derechos tutelados por este proceso, que serán interpretados en concordancia con lo regulado en el Código adjetivo, citado por (Gaceta Jurídica [G.J], 2008).

- Código Procesal Constitucional :

El Código Procesal Constitucional , ley N° 28237 (publicada en el diario oficial El Peruano, el 31 de mayo de 2004, y cuya entrada en vigencia data del 1 de diciembre del mismo año); en su calidad de primer dispositivo que sistematiza la regulación de todos los procesos constitucionales en un único cuerpo normativo, incorpora una serie de disposiciones aplicables al proceso de Hábeas Corpus.

Así, regula a través de las disposiciones generales, aplicables a los procesos de Hábeas Corpus, entre otros. Es preciso señalar que dentro del marco general que presenta el Código Procesal Constitucional existen regulaciones específicas como el caso de Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales (artículo 4).

En cuanto a la regulación específica del proceso, debemos señalar que establece el catálogo, enunciativo por cierto, de los derechos que conforman la libertad individual y que pueden ser protegidos por este proceso que vendían a desarrollar la disposición contenida en el artículo 200 de la Constitución.

Posteriormente, la Ley N° 28946, publicada en el diario oficial El Peruano, modificó entre las disposiciones que a este proceso interesan, los artículos 3 (procedencia de los procesos constitucionales frente a actos basados en normas), 7 (representación del Estado) y 10 (excepciones y defensas previas) de este Código, citado por (Gaceta Jurídica [G.J], 2008).

▪ A nivel internacional

- Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Esta Declaración fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948. En ella, se reconocen los derechos a la vida, la libertad y seguridad personal (artículo 3); asimismo, se proscribe el sometimiento a cualquier forma de tortura, trato cruel, inhumano o degradante (artículo 5).

Por otro lado, encontramos el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que ampare a la persona de los actos que vulnere sus derechos fundamentales, debiendo identificarse al proceso de Hábeas Corpus como uno de estos recursos, a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, a circular libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, el derecho al asilo, entre otros, citado por (Gaceta Jurídica [G.J], 2008).

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Este Pacto, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, reconoce, entre otros, el derecho a la vida, vinculado a la prohibición de forma arbitraria de su privación, prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libertad y seguridad personal, entre otros.

Finalmente, encontramos las garantías mínimas con las que debe contar cualquier persona que sea sometida a un proceso judicial, cuya tutela se brindará a través del proceso de Hábeas Corpus en caso de ser violentadas.

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional de Bogotá, Colombia, en 1948. En esta declaración se reconocen los derechos a la vida, libertad y seguridad personal, derechos de todas las personas a fijar su residencia en el territorio nacional, y a transitar por el libremente, así como a abandonarlo por propia voluntad, derecho a la inviolabilidad de domicilio.

Por otra parte, el artículo XVIII establece el derecho a recurrir antes a los tribunales para hacer valer sus derechos, así como a disponer de un recurso sencillo y breve con el cual se ampare a la persona frente a actos arbitrarios cometidos por la autoridad, lo que ha sido interpretado más adelante, como la existencia del proceso de Hábeas Corpus, citado por (Gaceta Jurídica [G.J], 2008).

- Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Esta Convención, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, recoge una serie de derechos que son tutelados a través del proceso de Hábeas Corpus. Así, reconoce el derecho a la integridad personal y seguridad personal, la obligación de llevar a la persona detenida ante un tribunal competente, entre otros.

Finalmente, se garantiza el derecho a la protección judicial, es decir el derecho a un recurso judicial sencillo y rápido, o a cualquier otro medio efectivo por un tribunal competente que ampare a las personas de las posibles violaciones de sus derechos fundamentales, lo cual hace referencia, según ha interpretado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, al proceso de Hábeas Corpus, citado por (Gaceta Jurídica [G.J], 2008).

2.4.1.4 Concepto y finalidad del Hábeas Corpus

Debe mencionar que, la palabra Hábeas Corpus proviene de la expresión latina que puede literalmente traducirse en *tráigase el cuerpo*, esta garantía de naturaleza puramente personal tiene como objetivo fundamental garantizar la libertad individual, tutelando el derecho a la libertad personal, del cual toda persona goza ejerciéndose, como una “acción de garantía de la libertad personal frente al poder público o privado. Según el maestro García, (2001).

Es la Carta de 1979 la que diferenci6 nítidamente el Hábeas Corpus de las demás acciones de garantía, especializándolo únicamente para la protección de la libertad individual (Borea, 1996).

El Hábeas Corpus es el proceso constitucional mediante el cual se tutela el derecho a la libertad individual y los derechos conexos a ella, según el numeral 1 de artículo 200 de la Constitución Política del Estado, que señala:

La acción del Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnra la libertad individual o de los derechos constitucionales conexos”⁴.

En el mismo sentido, lo encontramos definido en el Código Procesal Constitucional que, en su artículo 25, señala lo siguiente: “Procede el Hábeas Corpus ante la acción u omisión que amenaze o vulnere los (...) derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual”⁵

En efecto, el Tribunal Constitucional ha definido al Hábeas Corpus, como una institución cuyo objetivo consiste en proteger la libertad personal, independientemente de la denominación que recibe el hecho cuestionado (detención, arresto, prisión, secuestro, desaparición forzada, etc)⁶

Ahora bien, existe una posible definición del Hábeas Corpus en el artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual recoge el derecho de toda persona privada de su libertad a recurrir ante un juez competente, a fin de que se decida sin demora sobre la legalidad de su arresto y ordene su libertad si este fuera ilegal.

Asimismo, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, a la luz del artículo 25, establece: (...) se observa que en algunos supuestos el Hábeas Corpus se regula de manera autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aquellos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras ocasiones el Hábeas Corpus es denominado “amparo de la libertad” (...)” (Gaceta Jurídica [G.J], 2008).

En el presente proceso se ha establecido su finalidad, esto es en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional Peruano, que señala los procesos constitucionales (Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Cumplimiento) tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional (...)”⁷

2.4.1.5 Características:

A. Sumariedad:

Se refiere aquella cualidad por la que este proceso se tramita “sin sujeción a las formas dilatorias del juicio ordinario en el procedimiento común, que le son extrañas, y sin otra regla ni otra guía que las discrecionales que impone la naturaleza misma excepcional y privilegiada del recurso y que basten a llenar las condiciones esenciales de todo juicio”. (Sagues, 1988).

⁴ Artículo 200, numeral 1 de la Constitución Política del Perú

⁵ Artículo 25 del Código Procesal Constitucional Peruano

⁶ STC Exp. N° 2336-2003-HC/TC, fojas 5

⁷ Artículo I del Código Procesal Constitucional Peruano

Es por este motivo que el proceso de Hábeas Corpus no admite, en su tramitación debate acerca de los medios probatorios presentados, admitiéndose solo alegaciones precisas respecto de los hechos y discusiones de las partes respecto de esas alegaciones; ello se refleja justamente en la carencia de una etapa probatoria en los procesos constitucionales, (artículo 9 del CPC) lo que se fundamenta en la naturaleza del derecho que se tutela.

Por otra parte, esta característica se aprecia claramente en el diseño del proceso establecido en el Código Procesal Constitucional, con plazos muy breves, lo que también encuentra apoyo en lo dispuesto en su artículo 13, que establece la preferencia en la tramitación de los procesos constitucionales (G.J, 2008).

B. Informalidad o antiformalismo:

Esta característica privilegia el acceso a este recurso prescindiendo de formalidades que revisten a los procesos ordinarios y que puedan convertirse en ritos que terminen lesionando el derecho cuya tutela se persigue. Es por ello, que el Código ha desprovisto de formalidades al proceso de Hábeas Corpus, coadyuvando a la celeridad del mismo.

Así, recordemos que en este proceso cualquier persona puede interponer la demanda (*actio populus*), además, de no necesitar firma de letrado para su tramitación. En cuanto a la forma de presentación de la demanda, esta también puede ser hecha verbalmente, en forma directa o por correo electrónico, y presentada ante cualquier juez penal sin respetar los turnos (artículos 26 y 27 del Código Procesal Constitucional) (G.J, 2008).

C. Inmediación:

Entendida esta como la obligación que tiene el juez constitucional de tomar un conocimiento directo de los hechos, lo que se traduce en el contacto que debe tener con las partes y las autoridades, funcionarios o personas emplazadas en el proceso

Ello, podemos apreciarlo en el Código Procesal Constitucional, norma que establece su tramitación, la obligación del juez de constituirse en el lugar de los hechos con la finalidad de verificar las circunstancias en las que se encuentra la persona a quien se está lesionando sus derechos fundamentales.

Por otro lado, esta característica también se refleja en la posibilidad de quienes ejecutaron la violación para que explique la razón que motivó la agresión; constituyendo todas esas actuaciones lo que se conoce como la investigación sumaria (G.J, 2008).

D. Es imprescriptible:

Toda vez que la demanda puede ser interpuesta en cualquier momento, sin considerarse en nuestra legislación plazos de prescripción o caducidad para este proceso constitucional (G.J, 2008).

E. Es de naturaleza jurisdiccional:

Al ser tramitado únicamente en sede jurisdiccional (Poder Judicial y Tribunal Constitucional), en tanto que inviolable en la medida que no suspende bajo ninguna circunstancia, ni siquiera durante los estados de excepción, tal cual ha señalado el propio Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (G.J, 2008).

2.4.1.6 Derechos que protege el Hábeas Corpus

Con respecto a los derechos que protege el proceso de Hábeas Corpus, establecido en el artículo 25 de la Código Procesal Constitucional, se indica en este artículo que *“procede el Hábeas Corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente conforma la libertad individual:*

- A. La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o trato inhumanos o humillantes, ni violentados para obtener declaraciones.
- B. El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su conyugue, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- C. El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado, sino por sentencia firme.
- D. El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia, sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.
- E. El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue o en ningún caso si peligrase su libertad por seguridad por el hecho de ser expulsado.
- F. El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de Ley de Extranjería o de Sanidad.
- G. El derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez, por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, sin perjuicio de las excepciones que en el consignan.
- H. El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a ley de la materia.
- I. El derecho a no ser detenido por deudas.
- J. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, o de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.
- K. El derecho a no ser incomunicado, sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución.
- L. El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.
- M. El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.
- N. El derecho a la excarcelación de un procesado o condenando, cuya libertad declarada por el juez.

- O. El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución.
- P. El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada.
- Q. El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena.⁸

También procede el Hábeas Corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Es necesario precisar que existen derechos reconocidos que están vinculados con la libertad personal y pueden ser tutelados por el Hábeas Corpus. Según el autor Rosas, (2015).

2.4.1.7 Requisitos de la demanda

La demanda de Hábeas Corpus, es la que tiene menor cantidad de formalidades para su presentación, por su propia naturaleza y los derechos que tutela, puede ser presentada por escrito o verbalmente. Si es escrita, deberán consignarse los nombres y apellidos, así como la firma de quien la presenta. (...) Cuando es presentada en forma oral, se levantará un acta en el juzgado, según lo dispuesto en el artículo 27 del Código Procesal Constitucional. Según el autor Rosas, (2015).

2.4.1.8 Legitimación activa y pasiva

La legitimación activa hace referencia a una determinada relación del sujeto con la situación jurídica sustancial que se deduce en juicio, según Eto, (2013).

Por lo tanto, la interposición de la demanda de Hábeas Corpus se tramita vía penal, pudiendo ser interpuesta tanto por el afectado o por otra persona a su favor, también está facultado de ser interpuesto la Defensoría del Pueblo, debido a la preeminencia y relevancia del derecho a la libertad personal (Rosas, 2015).

El Tribunal Constitucional ha desarrollado el contenido de la legitimación, en el fundamento siguiente:

*(...) La legitimación activa amplia prevista para el proceso Hábeas Corpus permite la posibilidad de que la demanda pueda ser interpuesta por una persona distinta a la perjudicada, esto es, por cualquier persona natural o jurídica, sin necesidad de representación alguna, lo que, da lugar a lo que, (...). Esta forma de regulación, entre otros supuestos obedece a la naturaleza de los derechos tutelados por el Hábeas Corpus y a la necesidad de una tutela urgente de los mismos”.*⁹

La legitimación pasiva consiste en que la persona mediante sus acciones cause violación (acto lesivo) a los derechos constitucionales de otra persona, puede ser una persona en condición de particular o autoridad. Rosas, (2015).

⁸ Artículo 25 de la Código Procesal Constitucional del Perú

⁹ STC Ex. N° 5959-2008-PHC, fojas. 4

2.4.1.9 Juez competente

Como regla general se establece que la competencia jurisdiccional para conocer las demandas de Hábeas Corpus corresponde a cualquier juez especializado en lo penal, sea del lugar donde se encuentra el detenido, del lugar donde se haya ejecutado la medida o del lugar donde se haya dictado la misma, sin observar turnos.¹⁰

Competencia del juez de paz. Si la demanda de Hábeas Corpus se interpone ante un juzgado ubicado en un lugar distinto al lugar donde se produjo la afectación o de difícil acceso a aquel, el juez dictará orden perentoria e inmediata para que el juez de paz del distrito en el que se encuentra el detenido realice, bajo responsabilidad, las verificaciones y ordene las medidas inmediatas para hacer cesar la afectación (artículo 29 del Código Procesal Constitucional). Gaceta Jurídica (2008).

2.4.1.10 Procedencia e improcedencia del Hábeas Corpus

A. Procedencia:

Para que exista procedencia del proceso de Hábeas Corpus al tutelar el derecho a la libertad personal y conexas, es necesario que exista manifiestamente acto lesivo del derecho constitucional.

De lo expresado, se debe citar que *“Los procesos constitucionales de Hábeas Corpus, (...) procede cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, esta debe ser cierta y de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo.”*¹¹

Ahora, para la procedencia de un Hábeas Corpus contra resolución judicial firme está supeditado a la existencia de una afectación manifiesta contra el derecho a la libertad personal como derecho fundamental que, debe ser protegido de forma efectiva e inmediata. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha expresado mediante su jurisprudencia, criterios que desarrollan los supuestos de procedencia, Rosas, (2015) veamos:

*“(...) El Hábeas Corpus no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneración. Para tal efecto debe reunir determinadas condiciones tales como: a) La inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal (...); y b) que la amenaza a la libertad sea cierta, (...)”*¹².

El Tribunal Constitucional considera que cuando el inciso 1) del artículo 200 de la Constitución señala que, el Hábeas Corpus *“procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona”*.

¹⁰ Artículos 12 y 28 del Código Procesal Constitucional Peruano

¹¹ Artículo 2 del Código Procesal Constitucional Peruano

¹² STC Exp. N° 02665-2003-PHC, fojas 3

La Constitución no excluye del concepto de “autoridad” la figura de los jueces como sujetos susceptibles de vulnerar derechos constitucionales y, con ello, prohíbe que se pueda interponer el proceso de Hábeas Corpus contra los diversos actos que pudieran expedir los jueces, cualquiera sea su clase.

Al contrario, es lo suficientemente omnicomprensivo de que cualquier norma con rango de ley que pretenda excluir del control constitucional los actos y resoluciones judiciales, no podía sino considerarse con la Constitución. Según el autor Rosas, (2015).

B. Improcedencia

La improcedencia del Hábeas Corpus, se encuentra regulada en el Código Procesal Constitucional Peruano que establece las causales de improcedencia de la demanda de Hábeas Corpus.

No proceden los procesos constitucionales cuando:

- ✓ Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
- ✓ Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de Hábeas Corpus.
- ✓ El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional.
- ✓ No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en el proceso de Hábeas Corpus.
- ✓ A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o haya litispendencia.
- ✓ Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado.
- ✓ Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, salvo cuando sean de naturaleza jurisdiccional o cuando, siendo jurisdiccionales, violen la tutela procesal efectiva.
- ✓ Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas identidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o relevancia constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes.
- ✓ Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de Hábeas Corpus.¹³

¹³ Artículo 5 del Código Procesal Constitucional Peruano

“(…) El Tribunal Constitucional considera que la aplicación de la causal de improcedencia referida debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta:

- ✓ En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados.

En esta actividad el juez, conforme a la obligación constitucional de protección de los derechos fundamentales, debe dejar de lado aquellas interpretaciones formalistas y literales sobre los derechos presuntamente afectados para dar paso a la búsqueda e identificación de aquellos otros derechos fundamentales, que si bien no hubiesen sido mencionados expresamente en la demanda (...).

- ✓ En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello, debe tenerse presente no solo el petitorio, sino también todos los hechos alegados en la demanda, es decir, que debe examinada en su conjunto.
- ✓ En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión de la demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de Hábeas Corpus. Si la pretensión no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada improcedente”¹⁴.

¹⁴ STC EXP. N° 6218-2007-PHC, fojas 16

2.4.2. Tipos de hábeas corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

2.4.2.1. Hábeas Corpus Reparador

“(…) Respecto del Hábeas Corpus reparador, es preciso señalar que dicha modalidad representa la modalidad clásica o inicial del Hábeas Corpus, la misma que se promueve para obtener la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida.

Se presenta, por ejemplo, cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúa en reclusión pese a haberse cumplido su pena, por sanciones disciplinarias privativas de libertad, entre otros”¹⁵

2.4.2.2. Hábeas Corpus Restringido

“(…) El Tribunal ha establecido que el Hábeas Corpus restringido (...) Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio.

Es decir que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, se la limita en menor grado. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbadores carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes, las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; (...), etc.

Entonces, dado que el objeto del Hábeas Corpus restringido no consiste en atender aquellos supuestos en los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino que procede en aquellos casos en los cuales existe una restricción menor en la libertad física de la persona, se convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito (...).¹⁶

2.4.2.3. Hábeas Corpus Correctivo:

“(…) El proceso constitucional de Hábeas Corpus no solo protege la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende a otros derechos fundamentales.

En efecto, su tutela comprende también la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan reclusas en establecimientos penales e incluso de personas que, bajo una especial relación de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados”¹⁷.

2.4.2.4. Hábeas Corpus Preventivo

“Es preciso tomar en consideración que, tal como lo dispone el inciso 1) del artículo 200 de la Constitución, el Hábeas Corpus no solo procede ante el hecho u omisión de cualquier

¹⁵ STC EXP. N° 2663-2003-HC/TC

¹⁶ STC EXP. N° 10101-2005-PHC, fojas 1

¹⁷ STC Exp. N° 2700-2006-PHC; Fojas 2 y 3

autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneración.

(...) A efectos de valorar la amenaza frente a la cual procede este proceso constitucional, este colegiado ha sostenido que: (...) se debe comprobar: a) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador (...); y b) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza de la libertad, dejando de lado las conjeturas o presunciones”.¹⁸

2.4.2.5. Hábeas Corpus Traslativo

Se da en virtud de lo cual continuase detenido un reo, luego del plazo límite previsto en la ley para la audiencia oral donde se resuelva sobre su culpabilidad o inocencia, o si ya hubiese cumplido su condena y continuase en prisión correspondería plantear un Hábeas Corpus traslativo, para que sea liberado.

Se busca proteger la libertad o la condición jurídica del *status* de la libertad de los procesados o condenados, afectadas por las burocracias judiciales y penitenciarias, que indebidamente pudieran estar extendiendo la restricción o privación de la libertad de los detenidos en un proceso judicial o de los reos que ya han cumplido su condena pero siguen en cárcel. (Abad et al., 2007)

2.4.2.6. Hábeas Corpus Instructivo

Se utiliza ante el caso de una persona detenida o desaparecida por autoridad o particular que niega la detención y por eso es imposible ubicarla, se ocasiona afectación a sus derechos, como: a la libertad, a la comunicación, derecho de defensa y, por lo general, a la vida y a la integridad personal, en virtud del cual, el juez del Hábeas Corpus, a partir de indagaciones sobre el paradero del detenido – desaparecido, busque identificar a los responsables de la violación constitucional.

Ello es posible, en base a que: <<el Hábeas Corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida>> Abad et al., (2007)

2.4.2.7. Hábeas Corpus Innovativo

“(...) Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante.”¹⁹.

(García, 1991) afirma que dicha acción de garantía “debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aun cuando este ya hubiera sido consumado”. Asimismo, (Landa, 2003), acota que (...) a pesar de haber cesado la violación de la libertad individual, sería legítimo que se plantee un hábeas Corpus innovativo, siempre que el afectado no vea restringida a futuro su libertad y derechos conexos (...)

¹⁸ STC EXP. 2663-2003-PHC, fojas 6

¹⁹ STC EXP. N° 47650-2007-PHC, fojas 2

2.4.2.8. Hábeas Corpus Conexo

Utilizado cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores (ejemplo: restricción del derecho de defensa, a la presunción de inocencia, a la motivación de las resoluciones, etc.) (Gaceta Jurídica [G.J], 2012).

2.4.2.9 Hábeas Corpus Excepcional

“Nuestra Constitución regula los estados de excepción en el artículo 137, y el artículo 200, parte final²⁰, establece que el ejercicio de las acciones de Hábeas Corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la citada Constitución.

Es innegable así la procedencia del Hábeas Corpus en los estados de excepción. Debe anotarse, que la tramitación correcta de este Hábeas Corpus debe hacerse a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que se utilizan para determinar la validez de los actos que restringen derechos en los estados de excepción.

(...) Las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas y motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción, o si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos. La aplicación del principio de proporcionalidad, si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado, (...)”²¹

²⁰ Artículo 137 y 200 de la Constitución Política del Perú

²¹ Código Procesal Constitucional, “exposición de motivos”

2.4.3. Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales:

2.4.3.1 Definición de resolución judicial

Es aquella que pone fin a un conflicto mediante una resolución fundamentada en el orden legal vigente (Academia de la Magistratura [A.M], 2008).

(Ossorio, 2007) Cualquiera de las decisiones, desde las de mero trámite hasta la sentencia definitiva, que dicta un juez o tribunal en causa contenciosa o en expediente de jurisdicción voluntaria.

2.4.3.2 Aproximación conceptual

El Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales es un supuesto de procedencia contra actos de la judicatura (proceso judicial) que, afectan la tutela procesal efectiva.

El aludido supuesto de procedencia se encuentra establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, además de estar contenido implícitamente en el numeral 1 del artículo 200 de la Constitución debido a que la norma literalmente no consigna la procedencia del Hábeas Corpus frente a resoluciones judiciales, como si lo precisa con la acción de garantía constitucional de amparo, según el autor Rosas, (2015).

2.4.3.3 Alcances del proceso regular e irregular

El Tribunal Constitucional ha manifestado que, la demanda constitucional no procede contra resoluciones emitidas dentro “de un proceso regular, donde no se han vulnerado ninguno de los derechos protegidos por el artículo 25 del Código Procesal Constitucional”²².

Por el contrario, “una acción de garantía constituye la vía idónea para evaluar la legitimidad constitucional de los actos o hechos practicados por quienes ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida que de ellas se advierta una violación del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional”.²³ De esta manera, una resolución judicial, “sólo puede ser enjuiciada constitucionalmente cuando derive de un proceso irregular”.²⁴

El Tribunal Constitucional, ha establecido con respecto al proceso regular e irregular un contenido conceptual y los alcances de ambos tipos de proceso, para entender la procedencia del Hábeas Corpus frente a resoluciones judiciales que provienen de un proceso irregular, vulnerando la tutela procesal efectiva (...). De lo expuesto, estos aspectos son abordados en los fundamentos siguientes:

Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, el Tribunal Constitucional no deduce que las tantas veces citadas Leyes N° 23506 y 25398 sean contrarias a la Constitución, so pretexto de que estas – en un específico sentido interpretativo – parecen restringir, al margen de la Norma Fundamental, el Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales.

²² Exp. N° 4166 -2005-PH/TC, de fecha 5 de diciembre de 2005, fojas 8

²³ Exp. N° 1230-20012-HC/TC de fecha 20 de junio de 2002, fojas 9

²⁴ Exp. N° 2631-2005-PHC/TC de fecha 27 junio de 2005, fojas 2

En primer lugar, porque del contenido de las Leyes citadas líneas arriba, no se deriva que no pueda promoverse un Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, dado que ambas disposiciones solo restringen su procedencia a aquellos supuestos en que estas sean expedidas dentro de un proceso “regular”, estableciéndose que las anomalías que pudieran cometerse dentro de un proceso solo pueden resolverse dentro de los mismos procesos judiciales en que estas se originaron.

Y no de otro modo, en efecto, podría ser. Si una resolución judicial emana de un proceso regular, y se han respetado las diversas garantías que integran el debido proceso, no cabe acudir al Hábeas Corpus, pues el objeto de este no es hacer las veces de un recurso de casación o convertir a las instancias de la justicia constitucional, a su vez, en supra instancias de la jurisdicción ordinaria, sino, como se deduce de la propia Constitución, proteger únicamente derechos constitucionales.

En este contexto, para el Tribunal Constitucional, el concepto de “proceso regular”, como supuesto de improcedencia del Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, está inescindiblemente ligado al desarrollo normal y respeto escrupuloso de los derechos de naturaleza procesal: el de tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso y, con ellos, todos los derechos que lo conforman.

En la medida en que dichas Leyes N° 23506 y 25397 así se entiendan, se trata, de disposiciones compatibles con la Norma Suprema. (...): cada vez que una norma legal pueden interpretarse, donde una de las cuales riñe con la Constitución, mientras la otra es compatible con su contenido, el juez siempre debe optar por aquella que resulte en armonía con la Norma Suprema del Estado, según Rosas, (2015).

Idéntico criterio sostiene en relación con el inciso c) del artículo 16 de la Ley N° 25398, cuando establece que “no procede la acción de Hábeas Corpus”(.....) c) “En materia de liberación (...) cuando (.....) “Esté cumpliendo pena privativa de la libertad ordenada por los jueces”. Efectivamente, no puede acudirse al Hábeas Corpus ni el discutirse o ventilarse asuntos resueltos y que, como es la determinación de la responsabilidad criminal, son de incumbencia exclusiva de la justicia penal.

El Hábeas Corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución y no para revisar si el modo como se han resuelto las controversia de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria.

En cambio, no puede decirse que el Hábeas Corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales derivadas de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial²⁵.

2.4.3.4 Procedencia frente a infracciones procesales

A. Presupuesto de firmeza de resolución

La exigencia de firmeza: En esta línea el investigador orgánico ha desarrollado la figura de procedencia del proceso constitucional contra resoluciones judiciales en el artículo 4 Código Procesal Constitucional.

²⁵ Exp. N° 1230-2002-HC, fojas 6 y 7

En este dispositivo se ha establecido la procedencia del amparo y del Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, siempre y cuando se cumplan los dos siguientes requisitos: que la resolución judicial haya adquirido firmeza (requisito formal); y que la resolución judicial se haya emitido en vulneración de derechos fundamentales (requisito material).

En lo que respecta al primero de los mencionados requisitos, es tajante el legislador en el citado artículo. Y también el Tribunal Constitucional que cuando dispone que no es posible cuestionar la validez de una resolución judicial por violatoria de los derechos fundamentales, si es que antes no ha adquirido firmeza²⁶

Entre los presupuestos de carácter procesal que se exige para la procedencia del Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, son el presupuesto sobre la firmeza de la resolución judicial que, debe entenderse, desde el momento que la resolución judicial adquiera su condición jurídica firme, requiriendo para lograr esta condición de firmeza que, estos medios impugnativos deben contener la posibilidad de revocar la resolución impugnada.

El Tribunal Constitucional ha precisado en su jurisprudencia, sobre el presupuesto de procedencia del carácter de firmeza de la resolución judicial, desarrollando aspectos para la procedencia de este supuesto, en cuanto al agotamiento de los recursos impugnativos y su condición de firmeza, en los términos siguientes:

“Que respecto al momento desde el cual se cuenta el plazo de prescripción, relacionado con el concepto de resolución judicial firme, el Tribunal Constitucional sostiene que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario.

En ese sentido, cuando exista una resolución contra la cual no cabe interponer medios impugnatorios o recursos que tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el plazo prescriptorio debe contarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de dicha resolución inimpugnable²⁷.

B. Presupuesto de procedencia, vulneración manifiesta de la libertad individual y la tutela procesal efectiva

En lo que respecta al requisito material, la resolución judicial deberá vulnerar algún derecho fundamental de naturaleza procesal para la procedencia del Hábeas Corpus se necesita la presencia de un acto vulnerador del contenido constitucional del algún derecho fundamental ha supuesto la agresión también de la libertad personal o derechos fundamentales conexos, es que se ha permitido que entre a tallar el Hábeas Corpus.

Como bien ha dicho el Tribunal Constitucional, “aun cuando el proceso del Hábeas Corpus no tiene por objeto proteger el derecho al debido proceso, en habida cuenta de que se han establecidos judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora, el Tribunal Constitucional tiene competencia, *ratione materiae*, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos”²⁸.

Además, la agresión del derecho constitucional debe ser manifiesta, como la propia norma lo dispone y el Tribunal Constitucional lo exige: “debe fundamentarse con suficiente elementos de juicio la forma en que “manifiestamente” la resolución judicial incoada vulnera el

²⁶ Exp. 4396-2005-PHCTC, de 23 de agosto de 2005, fojas 3

²⁷ Exp. N° 0195-2005-PA, fojas 3

²⁸ Exp. N° 1782-2004-HC/TC de fecha 22 de setiembre de 2005, fojas 2

derecho a la tutela procesal efectiva que conexamente se considera que afecta la libertad personal”²⁹

En materia de Hábeas Corpus, si la resolución judicial cuestionada vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva, tal situación habilita al perjudicado para acudir a este proceso constitucional en salvaguarda de su derecho constitucional procesal.

No puede pasar desapercibido que, a la luz de lo estipulado en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, procederá el Habeas Corpus contra una resolución judicial si el juez constitucional verifica la violación de algunas de las manifestaciones del debido proceso que suponga también un menoscabo al derecho de la libertad individual,

En un proceso de Hábeas Corpus siempre y en todos los casos debe subyacer en el fondo un asunto relacionado con la libertad individual. Es por ello, que por más que en el caso justiciable se aduzcan vulneraciones al debido proceso, necesariamente tendrá que existir un debate acerca de la libertad individual de quien promueve la demanda,

En tal sentido, el Hábeas Corpus procede siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la libertad individual, esto es, cuando la vulneración (de algún derecho conexo) repercuta sobre la referida libertad. (López, 2011).

El Tribunal Constitucional ha señalado que, el derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado y de las reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos.

El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tiene que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación de las resoluciones”³⁰.

Tampoco debe ser confundida con la tutela procesal efectiva. Siendo que ella es una institución ordinaria de configuración legal, creada para comprender en ella todos los atributos que enunciativamente componen a los otros dos mencionados derechos fundamentales, a saber: “El libre acceso al órgano jurisdiccional, obtención de una resolución fundada en derecho, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales, a acceder a los medios impugnatorios regulados, derecho a probar, de defensa, entre otros.”³¹

2.4.3.5 Finalidad del Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales

El Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, dentro de sus finalidades no solo está el reparar (restablecer) el derecho vulnerado antes de la afectación del derecho fundamental invocado, también tiene por finalidad controlar la actuación de los jueces en sus instancias competentes, quienes tienen la obligación de garantizar el debido proceso que, le acude a toda persona inmersa en un proceso.

Según Rosas, (2015) sostiene que, cabe resaltar que la jurisprudencia constitucional ha precisado que la tutela procesal efectiva, es una forma de controlar la actuación de los jueces o

²⁹ Exp. N° 506664-PHC de fecha 17 de agosto de 2005 a fojas 1

³⁰ Exp. 3926 -2008-HC/TC, fojas 8

³¹ Exp. 4657-2012-AA/TC, a fojas 10

fiscales, parte de esta forma establecer el cumplimiento del ejercicio que todo justiciable tiene del derecho a la tutela procesal efectiva, en los términos siguientes:

“(…) La enunciación de una lista de derechos que el legislador ha establecido como atributos de la tutela procesal efectiva, para efectos de controlar la actuación de los jueces (...) en el ámbito de sus respectivas competencias relacionadas con los procesos judiciales, no agota las posibilidades fácticas para el ejercicio de dicho control, ni tampoco quiere significar una lista cerrada de derechos vinculados a la cláusula general de la tutela procesal efectiva.

Esto se desprende además de la propia lectura del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que al referirse a la tutela procesal efectiva lo define como “aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos (...)”.

(...) Supone una referencia sobre los alcances de tal derecho, más no debe interpretarse como una lista cerrada de posibles infracciones, (...) se trata de posibilidades interpretativas para su mejor aplicación. Resulta, por tanto, razonable pensar que con tal enunciación no está estableciendo la imposibilidad de que otros bienes constitucionales, (...) puedan también resultar afectados mediante la actuación del poder jurisdiccional del Estado”³²

Efectivamente, no puede acudir al Hábeas Corpus ni en el discutirse o ventilarse asuntos resueltos y que, como es la determinación de la responsabilidad criminal, son de incumbencia exclusiva de la justicia penal.

El Hábeas Corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución y no para revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria.

No puede decirse que el Hábeas Corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por vaciar de contenido al derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo.³³

2.4.3.6 Efectos de la sentencia del proceso de Hábeas Corpus

En cuanto se refiere a los efectos de las sentencias fundadas del proceso de Hábeas Corpus, es del caso señalar que el Código Procesal Constitucional (artículo 34) contempla cuatro medidas, a saber:

1) La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho, 2) que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, (...); 3) que la persona privada de su libertad sea puesta inmediatamente a disposición del juez competente (...), 4) que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse.³⁴

³² STC EXP. N° 1209-2006-PA, fojas 26

³³ STC EXP. N° 12309-2002-HC, fojas 7

³⁴ Artículo 34 del Código Procesal Constitucional Peruano

2.4.3.7 Hábeas Corpus vs Amparo Judicial

Según el destacado constitucionalista Eto, (2013), afirmó que quien señala que “el amparo contra Hábeas Corpus de partir, como regla general de que, quien lo interponga, sea la misma persona titular del derecho fundamental a la libertad individual, en sus múltiples manifestaciones, o aspectos conexos a ella o también señala que, puede darse el caso que el amparo contra Hábeas Corpus pueda ser interpuesta por la emplazada que perdió en el Hábeas Corpus.

El Tribunal Constitucional con respecto al Amparo contra Hábeas Corpus, señaló específicamente que el control constitucional procede en supuestos específicos y excepcionales, que en ninguna forma puede tener los mismos parámetros establecidos en el amparo contra amparo. De esta forma ha establecido las consideraciones y criterio siguientes:

Siendo clara la interpretación de esta disposición del Código Procesal Constitucional puede ser controlado por otro proceso constitucional cuando se evidencie la vulneración de derechos fundamentales, cabe verificar seguidamente si en el caso del Amparo contra Hábeas Corpus rigen los mismos criterios de procedibilidad que en el caso del Amparo contra Amparo.

Sobre el particular el Tribunal Constitucional, teniendo en consideración: - el relevante rol del legislador en el Estado democrático y social de derecho, específicamente en el desarrollo de los derechos fundamentales y en el desarrollo y mejor precisión de las competencias, de los poderes del estado u órganos constitucionales: - el principio de división de poderes, conforme al cual exige que tanto el poder jurisdiccional como el poder legislativo deben respetar estrictamente su respectivo ámbito de competencias, entre otros contenidos; - el criterio de interpretación de la ley conforme a la Constitución (que exige identificar contenidos de la ley que resulten compatibles con la norma fundamental) y su efecto reflejo, el criterio de interpretación de la Constitución conforme a ley (que exige al juez constitucional que en la interpretación de los preceptos constitucionales se deba tomar en cuenta, en la medida de lo posible, aquella interpretación de la Constitución formulada por el legislador democrático al expedir las respectivas leyes); y – principalmente el rol del proceso de Hábeas Corpus en la protección urgente de la libertad personal y derechos conexos a esta, estima que en el caso de Amparo contra Hábeas Corpus debe optarse por la alternativa B, según la cual solo procede equipararse a aquellos Amparo contra Amparo.

En efecto, si un proceso de Hábeas Corpus sirve como garantía jurisdiccional para proteger bienes tan preciados como la libertad personal y los derechos conexos a esta, entonces deben establecerse reglas mínimas y excepcionales para su control mediante Amparo. En primer lugar, es necesario dejar claramente establecido que la interposición del proceso de Amparo, que discute o pone en tela de juicio lo resuelto en un Hábeas Corpus, no puede significar la suspensión de ejecución de lo establecido en este.

No puede admitirse, bajo ningún punto de vista, que un proceso constitucional sea interpuesto o sirva para dilatar la reposición en la satisfacción de un bien tan esencial como la libertad personal. Por ello, cuando el juez constitucional aprecie que la decisión tomada en el Hábeas Corpus aún no ha sido cumplida y, en cambio, se está interponiendo un Amparo contra ella, deberá declarar improcedente de modo liminar la demanda de Amparo³⁵

³⁵ STC Exp. N° 01761-2008 – AA, fojas 26 - 28

2.4.4 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración de derechos constitucionales de carácter procesal

2.4.4.1 Habeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho al debido proceso

El Tribunal Constitucional en reciente jurisprudencia, dentro de la estructura de argumentación de sus sentencias, de hábeas Corpus contra resoluciones judiciales examinando la posibilidad de vulneración del debido proceso ha tenido acertadamente desarrollar lo referente a la protección del debido proceso a través del Hábeas Corpus y los límites del control constitucional en materia penal.

Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional en una posición activista sobre el control constitucional en materia penal ha señalado que “En el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados, estaremos sin lugar a dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional, y ante un contexto donde, al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se le reconoce, resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la constitución.

Puntualizando queda en todo caso, que solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales – violación del contenido no esencial o adicional- que no son, por sí mismas, contrarias a la Constitución, sino al orden legal. Mientras que el proceso genere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomalía o irregularidad será mediante los medios de impugnación previstos al interior de cada proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional.³⁶

De esta forma, sea delimitado, los parámetros de control constitucional en materia penal como la actuación del juez penal, en un caso en concreto, en cumplimiento de todas las garantías procesales, en el cual tienen tutelar observancia el debido proceso y la tutela procesal efectiva.

El Tribunal Constitucional, como lo mencioné ha establecido dentro de su jurisprudencia reciente “la protección del debido proceso a través del Hábeas Corpus y los límites del control constitucional en materia penal”, estableciendo que la vulneración del debido proceso debe producir efectos lesivos sobre la libertad personal, así como también los parámetros de control donde el examen del constitucional se desarrolla, en cada caso en concreto. De esta forma el Tribunal, determina la actuación de su control en materia penal, en los términos siguientes:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el Hábeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva. En ese sentido, debe entenderse que el proceso de Hábeas Corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la “supuesta” violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la libertad personal para que se pueda aplicar lo establecido en este precepto normativo.

³⁶ Exp N° 8125-2005-PHC, fojas 5

En ese sentido, y de acuerdo a la línea jurisprudencial ya establecida por este Tribunal, la jurisdicción constitucional no debe ser entendida como:

“Una instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal de los inculpados, ni tampoco la calificación del tipo penal que estos hubieran incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, debe quedar plenamente establecidos que si bien el juzgador constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, en los términos que aquí se exponen, dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución, se tiene – porque el ordenamiento lo justifica – la posibilidad de reclamar protección especializada en tanto es el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del estado constitucional de derecho”³⁷

2.4.4.2 Habeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho a la presunción de inocencia

Al respecto, El Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia las diferentes situaciones jurídicas en las cuales el derecho a la presunción de inocencia, se desenvuelve dentro del proceso penal, el cual debe prestar las garantías debidas para no afectar este derecho constitucional aunque sea un derecho de carácter relativo. Conozcamos lo señalado por el Tribunal en los fundamentos siguientes:

“El derecho a la presunción de inocencia prohíbe toda consecuencia gravosa en la esfera de los derechos de la persona derivada de la imputación de la comisión de un delito, en tanto no se haya determinado definitivamente, por resolución judicial, su responsabilidad penal en el ilícito. En tal sentido, excluye toda presunción de culpabilidad como consecuencia de ilícitos imputados a una persona”³⁸

No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente hacer algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución objetiva dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional.

Por otro lado, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales – como la detención preventiva o detención provisional-, sin que ello signifique su afectación “(...) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios del estado de derecho” siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

³⁷ Exp. N° 7454-2013 –PHC, fojas 5 a 7

³⁸ Exp. 8280-2006-PA

Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora una presunción *iuris tantum* y no absoluta, de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria. Nuestro Tribunal Constitucional, ha expresado la relevancia de respetar el derecho de toda persona inmersa en un proceso penal a presumirse inocente mientras no exista una resolución final, que resuelva concretamente su responsabilidad penal y su condena, requiriendo para llegar a esta resolución final, que la actividad probatoria sea suficiente y con las garantías procesales debidas, en las cuales no se genere ninguna duda que pueda afectar este derecho constitucional. De lo dicho, conozcamos lo determinado por el Tribunal en los fundamentos siguientes:

- ✓ Por último, porque al no haberse emitido pronunciamiento final sobre los hechos instruidos, continúa latente la presunción de inocencia. Por esta presunción *iuris tantum*, a todo proceso se le considera inocente mientras no se le pruebe su culpabilidad, es decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario, y rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el investigado en estado de sospecha durante toda la tramitación del proceso, el cual solo tendrá fin cuando se expida la sentencia que resuelva definitivamente el caso³⁹.
- ✓ Como regla de juicio, la presunción de inocencia impone que para declarar la responsabilidad penal de una persona se “requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado” (inciso 1 del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal).

2.4.4.3 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho de defensa

El Tribunal Constitucional ha tratado y desarrollado el derecho de defensa en diferentes casos en concreto, otorgándoles su contenido esencial y estableciendo su relación y vinculación con otros derechos constitucionales, como también con principios y dimensiones de orden jurídico, donde el derecho de defensa es fundamental para la observancia del debido proceso y el ejercicio de otros derechos constitucionales fundamentalmente de carácter procesal. Así tenemos la jurisprudencia siguiente:

- ✓ El derecho de defensa constituye un derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutirse en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés⁴⁰
- ✓ “La Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución. En virtud de él se garantiza que los justiciables, en la determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, no quedan en estado de indefensión. Por ello, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de los medios necesarios,

³⁹ STC Exp. N° 07510-2005-HC, fojas 3

⁴⁰ STC Exp. N° 01189-2000-PA, fojas 5

suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos”⁴¹

- ✓ Debe subrayarse que la Constitución reconoce el derecho de defensa, y que en virtud de este se garantiza que el justiciable, en la determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, no quede en estado de indefensión. Así todo justiciable tiene derecho a conocer en forma cierta, expresa e inequívoca, los cargos que pesan sobre él con el objeto de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de conducta prohibida que se le imputa, surgiendo el derecho de probar, el contradictorio, la igualdad sustancial que se le imputa, surgiendo el derecho a probar, el contradictorio, la igualdad sustancial, entre otros. Cuando atributos constitucionales del justiciable que son conocidos como tutela procesal efectiva⁴²

2.4.4.4 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho a la prueba

El Tribunal Constitucional ha señalado que:

“Existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un terreno legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa (...).

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesario, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la Sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”⁴³

Por otro lado, ha establecido que el juez ordinario debe realizar una valoración adecuada de la prueba y no omitir ninguna prueba que sea parte del proceso penal, siendo motivados con criterios objetivos y razonables que, consecuentemente se plasma en una sentencia ajustada al derecho. Como puede verse, uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida.

De lo cual se deriva una doble exigencia para el juez en primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables⁴⁴.

⁴¹ STC Exp. N° 1230-2002-PHC, fojas 18

⁴² STC Exp. N° 00402-2006-PHC, fojas 8

⁴³ STC Exp. N° 06712-2005-PHC, fojas 15

⁴⁴ STC Exp. N° 4831-2005-PHC/TC, fojas 8

Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso.⁴⁵

2.4.4.5 Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales por vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones

En el sistema de administración de justicia, específicamente dentro de la jurisdicción ordinaria penal, las resoluciones judiciales deben ser debidamente motivadas, expresando dentro de sus fundamentos la justificación de su decisión (fallo), realizando una adecuada valoración de las pruebas presentada por las partes y de más elementos inmersos dentro del proceso penal, donde se determina la responsabilidad de una o más personas sobre un hecho delictivo. La relevancia jurídica y la importancia que ha adquirido la garantía de motivar las resoluciones judiciales como elemento de control constitucional en materia penal, otorga las garantías debidas ante la actuación del juez.

También podemos encontrar posiciones jurídicas concretas, ubicadas dentro de nuestra jurisprudencia constitucional que expresaron que “la doctrina ha convenido en que la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales es la explicación que va dirigida a las partes, al juez de grado superior (que eventualmente conocerá en impugnación la decisión del inferior jerárquico) y al pueblo, que se convierte en juez de sus jueces⁴⁶.”

De esta forma, tanto la doctrina como la jurisprudencia, coinciden en establecer la relevancia y transcendencia de la motivación judicial para garantizar el proceso judicial y administración de justicia. Cabe mencionar, para una mejor comprensión sobre la función de la motivación judicial en el proceso penal, señalar que la motivación de las resoluciones judiciales reconoce “dos grandes funciones en el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, es un instrumento técnico procesal y, por el otro, es a su vez una garantía político – institucional. Efectivamente, se distinguen dos funciones en el ordenamiento jurídico. Por un lado, es un instrumento técnico procesal y, por el otro, es a su vez una garantía político – institucional. Efectivamente, se distinguen dos funciones del deber de motivar las resoluciones judiciales: i) Facilita un adecuado ejercicio del derecho de defensa de quienes tienen la condición de partes en el proceso, a la vez que constituye un control riguroso de las instancias judiciales superiores cuando se emplean los recursos pertinentes, ii) La de ser un factor de racionalidad en el desempeño de las funciones jurisdiccionales, pues garantiza que la solución brindada a la controversia sea consecuencia de una aplicación racional del ordenamiento, y no el fruto de la arbitrariedad o capricho en el ejercicio de la administración de justicia, según Taruffo, 2011.

Es necesario, mencionar que la motivación de las resoluciones judiciales de un proceso penal, no solo debe estar dirigida al condenando, sino también a todos los sujetos procesales que tengan legítimo interés en el fallo decisorio, teniendo que fundamentarse además, tanto la sentencia condenatoria como la absolutoria, alcanzando esta garantía a la reparación civil, debido que en la nuestra realidad de administración de justicia penal, existe carencia en la motivación de resoluciones judiciales, afectando de esta forma los derechos constitucionales inmersos en un proceso penal.

En cuanto al ámbito propiamente dicho del derecho a la motivación de resoluciones judiciales podemos afirmar que es un derecho constitucional que exige a la jurisdicción ordinaria, que las resoluciones que expiden deben contener las razones de hecho y derecho que justifiquen,

⁴⁵ STC Exp. N° 1014-2007-PHC, fojas 14

⁴⁶ Exp. N° 9598-2005-PHC, fojas 4

su decisión final, mediante un juicio de valor adecuado y coherente. Debemos agregar que normativamente este derecho constitucional está “recogido en el artículo 139, inciso 3 de la Carta Magna, su contenido esencial está delimitado en tres aspectos; cuando se citan las normas sin efectuar juicio alguno de subsunción o análisis; cuando el juez no se pronuncia respecto de las pretensiones de las partes, y cuando no explica de manera clara porque ha resuelto en determinado sentido, según Vargas Espinoza, 2011.

Por esta razón, es que el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales cumple un rol transcendental en el ejercicio y preservación de otros derechos constitucionales, además de la optimización del sistema de administración de justicia ordinaria. Con respecto al contenido del derecho a la motivación de resolución judicial y su reconocimiento constitucional, el Tribunal ha tratado extensamente y en reiterada jurisprudencia con referente a estos dos aspectos lo siguiente:

“La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación de remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver”⁴⁷

⁴⁷ Exp. N° 01230-2002-PHC, fojas 11 párrafo 2 y 3

2.4.5. Libertad individual

2.4.5.1. Una aproximación conceptual en torno a la libertad personal

“El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal, el cual tiene un doble carácter. Es también un atributo subjetivo, donde ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias.

Como atributo objetivo cumple una función institucional en la medida en que es un elemento vital para el funcionamiento del estado social y democrático de derecho, pues no sólo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales.⁴⁸, en virtud de lo cual se derivan los límites a su ejercicio, lo que no puede atentar contra otros bienes o valores constitucionales (...).⁴⁹

“La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido en el inciso 24) del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y en el artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

Al mismo tiempo que derecho subjetivo, constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado constitucional de derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales, a la vez que justifica la propia organización constitucional. Es importante señalar que, como todo derecho fundamental, la libertad personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. Enunciado constitucional del cual se infiere que no existen derechos absolutos e irrestrictos, pues la Norma Suprema no ampara el abuso de derecho.⁵⁰

2.4.5.2 Libertad personal como derecho y principio

“El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal. Se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias”⁵¹

2.4.5.3 Contenido constitucionalmente protegido

“El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal. Se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias”.⁵²

⁴⁸ Exp. N° 1091-2002-HC/TC

⁴⁹ Exp. N° 0724-2005-PHC, fojas 2

⁵⁰ Exp. N° 2096-2004-PHC, fojas 2

⁵¹ Exp. N° 8815-2005/PHC, fojas 2

⁵² Exp. N° 0019-2005/TC, fojas 11

“En cuanto derecho subjetivo, el derecho a la libertad personal garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante internamientos. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad se extienden a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen y de la autoridad o persona que la haya ordenado. Garantiza, por tanto, la libertad personal ante cualquier restricción arbitraria”.⁵³

2.4.5.4 Condiciones para considerar su amenaza

“La amenaza del derecho a la libertad personal (...) debe reunir determinadas condiciones, tales como: a) La inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de una atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios; y b) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento claro y seguro de la amenaza a libertad”⁵⁴

2.4.5.5 Detención preventiva: presupuesto

“Sobre la detención persona, el artículo 2, inciso 24), literal f, de la Constitución prevé, taxativamente la ocurrencia de dos supuestos para que sea legítima; a) el mandato escrito y motivado del juez; y b) el flagrante delito. La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son concurrentes y que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad pertinente es de 24 horas, con la excepción de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede extenderse por 15 días”⁵⁵

2.4.5.6 Detención preventiva en flagrancia delictiva

“Si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma, esta no es inconstitucional. Sin embargo, por el hecho de tratarse de una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia, cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general”⁵⁶

Es por ello que, la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, reconocida en el artículo 139.5 de la Constitución tratándose de la detención judicial preventiva en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva.

⁵³ Exp. 2510-2005-PHC, fojas 4

⁵⁴ Exp. N° 2435-2002-PHC, fojas 2

⁵⁵ Exp. N° 06142-2006-PHC, fojas 3

⁵⁶ STC Exp. 1091-2002-HC

2.4.5.7 Pena privativa de la libertad

“Si bien la imposición de una pena determinada constituye una medida que restringe la libertad personal del condenado, es claro que, en ningún caso, la restricción de los derechos fundamentales puede culminar con la anulación de esa libertad, pues no solamente el legislador está obligado a respetar su contenido esencia, sino, además, constituye uno de los principios sobre los cuales se levanta el estado constitucional de derecho.

Por ello, tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional considera que esta no puede ser intemporal, sino que debe contener límites temporales”

2.6 HIPÓTESIS

2.6.1 Hipótesis general:

Resulta pertinente y eficaz que el Hábeas Corpus contra resolución judicial proceda sin agotar la instancia judicial del proceso común en casos graves y de evidente ilegalidad, puesto que de lo contrario vulneraría la libertad individual.

2.6.2. Hipótesis específica:

Resulta posible que se deba establecer los casos en que la exigencia del agotamiento de la vía judicial del instrumento constitucional de Hábeas Corpus contra resolución judicial atentaría indebidamente la libertad individual de la persona.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 ENFOQUE:

- ✓ **Cualitativa;** porque tuvo como finalidad comprender los motivos que hacen necesario que el Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales proceda sin agotar la instancia judicial del proceso común cuando exista una evidente y grave vulneración de la libertad individual.

3.2 DISEÑO:

- ✓ **No experimental;** La presente investigación fue no experimental, porque se va a desarrollar netamente en el ámbito doctrinario y jurisprudencial.

3.3 NIVEL:

- ✓ **Descriptivo;** ya que se analizó y se recolectó la información que permitió comprender en que situaciones urge que no se exija el agotamiento de las vías previas de un proceso ordinario para la procedencia del hábeas Corpus, cuando se pretenda cuestionar una resolución judicial que vulnera en forma manifiesta la libertad individual.

3.4 TIPO:

- ✓ **Básica,** porque buscó ampliar el conocimiento teórico y general de la presente problemática, y contribuir así a la mejor interpretación de la norma por parte de los órganos jurisdiccionales al momento de resolver demandas de Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales.

3.5 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:

- a) Método Deductivo, toda vez que, se partió desde el exigente requisito de procedibilidad que impone la norma para el Hábeas Corpus cuando se cuestiona una resolución judicial, es decir, la imposición del agotamiento de la instancia judicial de un proceso común. Siendo que existen situaciones graves como: Impedir al procesado interponer recursos pertinentes al interior del proceso o cuando los medios impugnatorios que se interpongan no son resueltos en el plazo establecido en la ley.
- b) Método analítico; a través del cual se identificó las principales dificultades que impiden que no sea exigible el agotamiento de la instancia judicial para la procedencia del Hábeas Corpus contra resolución judicial en situaciones de grave vulneración de la libertad individual.

- c) Método Histórico; por medio del cual se efectuó una breve referencia respecto a la institución del Hábeas Corpus desde sus inicios y su trayectoria en los diferentes periodos de la historia y de esta manera se conoció la manera como ha evolucionado, pues la norma se haya sujeta a los cambios que reclama la evolución social.
- d) Método Dogmático; para la elaboración del presente trabajo se utilizó la doctrina jurídica relacionada al tema del Hábeas Corpus, según la Constitución Política Peruana y el Código Procesal Constitucional Peruana, siendo que de esta manera se dio respuesta al problema planteado.

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica que se empleó en la presente investigación, fue de aquella que privilegió los documentos, a fin de analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de investigación, por lo que se aplicará lo siguiente:

1. **Fichaje:** A través del cual se recopiló todo lo que se ha escrito directa o indirectamente sobre el Hábeas Corpus y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de las instancias legales extranjeras, asimismo, las razones que justificaron la procedibilidad del Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales sin agotar la instancia judicial, sus críticas a favor y en contra, llegando a tener una postura respecto a la investigación.
2. **Recolección y análisis de datos:** Por medio de esta técnica se analizó minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de investigación. La información que se recopiló se procesó de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. Asimismo, los datos obtenidos se analizaron detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada.

CAPÍTULO IV

PROBANZA DE LA HIPÓTESIS

4.1 Probanza Jurídico – Doctrinal

- ✓ **Si debe proceder el Hábeas Corpus contra resolución judicial sin agotar la instancia judicial ordinaria cuando exista una grave y evidente vulneración a la libertad individual de la persona.**

El Hábeas Corpus se encuentra consagrado en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Así, por ejemplo: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Siguiendo esta tendencia, el Tribunal Constitucional, citando la opinión consultiva OC/8/87 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, dice: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha equiparado el derecho sencillo, rápido y efectivo con los procesos de Amparo y Hábeas Corpus (opinión consultiva OC/8/87, párrafo 32).

De esta forma, (...) reconocen el derecho constitucional a la protección judicial de los derechos fundamentales. Protección judicial a la que se debe promover su acceso, aun si los actos que ocasionen agravio de los derechos constitucionales son expedidos por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales, dentro de los cuales, naturalmente, se encuentran comprendidos los jueces. Según (Aguirre Ch, Javier , s.f).

Ahora, la regulación del Hábeas Corpus en nuestro país; esto es, en el Código Procesal Constitucional constituye un adelanto en su tratamiento legislativo, siendo que la Ley del 21 de octubre de 1897 hasta la versión definitiva de la Ley 23506 (antecesora inmediata del citado Código), dicho instituto procesal, destinado a la tutela constitucional de la libertad, fue legislativamente, desarrollado a través de ocho leyes; y, luego, a partir de la Ley N° 23506, fue objeto de treinta y uno leyes, entre reformas, leyes complementarias, derogaciones, etc., de los que se advierte que era necesaria su regulación en un cuerpo de leyes orgánicamente estructurado y con vocación de autosuficiencia. (Valle Riesta, 2015) citado por Reyes, Laurel et al., (2015).

El Tribunal Constitucional recuerda en su jurisprudencia que entre las principales innovaciones recogidas por el Código Procesal Constitucional se encuentra la posibilidad de interponer procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, siempre que estas afecten la tutela procesal efectiva, para lo cual, el segundo párrafo del artículo 4 señala que este procederá cuando una resolución judicial firme vulnere de forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal, según Reyes, Laurel et al., (2015).

“A su vez, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4, segundo párrafo, que el Hábeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Que así pues no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de Hábeas Corpus; antes bien y en línea de principio, solo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulnere de forma manifiesta la libertad individual o derechos conexos a ella, lo que implica que

el actor, frente al acto procesal alegado lesivo, previamente haya hecho uso de los recursos necesarios que le otorga la ley.

Y es que, si luego de obtener una resolución judicial firme, no ha sido posible conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado, quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al proceso constitucional, a efectos de solicitar tutela” (...) ⁵⁷

“Dentro de esta misma concepción del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha indicado que la resolución judicial firme es el requisito de procedibilidad del Hábeas Corpus. Que conforme al artículo citado, constituye un requisito de procedibilidad para el instrumento constitucional interpuesto contra una resolución judicial, la firmeza de la resolución que se cuestiona. Ello implica que antes de la interposición de la demanda para el proceso constitucional, debe agotarse los recursos y remedios pertinentes al interior del proceso subyacente” (...) ⁵⁸

El Tribunal Constitucional hizo la precisión que, “No puede acudirse al Hábeas Corpus para discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como es la determinación de la responsabilidad criminal, siendo que ellos son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. El Hábeas Corpus es un proceso constitucional y no para revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria.

En cambio, no puede decirse que el Hábeas Corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula de derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo” (..) ⁵⁹

“Que por ello resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigadoras y de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza” (..) ⁶⁰

La regla de que el Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales proceda solo cuando no haya sido posible conseguir en la vía judicial la tutela del derecho vulnerado, bueno será tenerlo presente, no contradice el tenor del artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, el cual dispone que el Hábeas Corpus no cabe alegar la existencia de las vías procedimentales igualmente satisfactorias.

Y esto es así porque, cuando aludimos al Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, estamos hablando – en pocas palabras - de un proceso constitucional interpuesto contra una resolución judicial, en cuya dilucidación es necesario mantener a salvo las competencias propias de la judicatura ordinaria, las que de otro modo podrían quedar desnaturalizadas o ilegítimamente invadidas (Gaceta Jurídica, 2012).

⁵⁷ Exp. N° 6032-2008-PHC/TC

⁵⁸ RTC EXP. N° 3470-2005-PHC/TC

⁵⁹ RTC EXP. 4825-2008-PHC/TC fojas 2 y 3

⁶⁰ RTC EXP. N° 1922 – 2005- PHC/TC, fojas 3 y 4

Debe observarse que el problema no va por el lado de la eficacia, pues al interior del proceso común existen medios de impugnación igualmente eficaces que el proceso constitucional, el lado cuestionable en cierta medida es la carencia de inmediatez inherente al proceso constitucional. En efecto ambos procesos (común y constitucional) pueden ser igual de eficaces; sin embargo, ambos no son igual de inmediatos. (Aguirre Ch, Javier , s.f).

A partir del análisis de las resoluciones del Tribunal Constitucional, existía la tendencia general que las decisiones se orientaba a declarar improcedentes las solicitudes del Hábeas Corpus dirigidas contra resoluciones judiciales con fundamento en las citadas normas legales; sin embargo, también se admitían excepciones basadas en la infracción al debido proceso o cuando la resolución judicial que ordenaba la detención preventiva se expedía sin que se cumpla con los requisitos. Debido a que se trata de un supuesto de procedencia excepcional, no todas las resoluciones emitidas por un juez pueden ser objeto de revisión por parte de un juez constitucional, sino que deben cumplir con los presupuestos procesales taxativos contenidos en el segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, entre los que se encuentra la firmeza de una resolución judicial, según Reyes, Laurel et al., (2015).

Es importante mencionar que, en el caso Abraham Luis Neyra Carpio (Exp. 697-200-HC-/TC, 18 de diciembre de 2001), el Tribunal Constitucional estableció que ante la transgresión del derecho a que todo individuo deba ser juzgado en un tiempo razonable, la demanda de Hábeas Corpus interpuesta, fue declarada procedente y fundada, a pesar que en aquel tiempo regía el artículo 16 inciso a) de la Ley Complementaria N° 25398 que disponía “No procede las acciones de Hábeas Corpus cuando el recurrente tenga instrucción abierta o se halle sometido a juicio por los hechos que origina la Acción de Garantía. (Valle Riesta, 2015) citado por (Reyes Laurel et al., 2015).

Se llega a la conclusión que desde antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia admitía excepciones de procedibilidad para con esta figura constitucional cuando existía una situación evidente de violación de la libertad individual.

En el vigente Código Procesal Constitucional se evidencia que, a diferencia de lo que ocurre con el recurso de amparo, en el Hábeas Corpus no se precisó lo que debía entenderse por “firme”, de tal modo que el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, tuvo que delimitar dicho concepto.

Señalando que “la firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, solo será posible cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control constitucional. Del mismo modo, la postura acogida por el Tribunal Constitucional, en consonancia con el citado Código Procesal Constitucional, fue la de exigir el agotamiento de los recursos y remedios previstos por la ley procesal de la materia. (Reyes Laurel et al., 2015).

Es importante señalar que, en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica), se encuentra regulada el agotamiento de las vías previas, esto es, en su artículo 46, se encuentra estipulado lo siguiente: 1. Para que petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión, se requerirá:

- a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.
- b) Que sea presentada dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que el presento lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
- c) Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y

- d) Que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad

2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando:

- b) No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o se haya impedido de agotarlos, y
- c) Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos⁶¹.

Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre el tema en su jurisprudencia, señalando: La regla del previo de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta “coadyuvante o complementaria” de la interna.

Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como ya lo señaló la Corte en su Sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirmó: La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención.

En efecto, según ella, los estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo del debido proceso legal (art. 8.1), de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art.1)⁶²

El artículo 46 de la Convención remite “a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos“. Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resultan las excepciones contempladas en el artículo 46.2. Que, sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida.

En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o Hábeas Corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad.

Para el Gobierno, los recursos de la jurisdicción Hondureña no se agotan con el Recursos de Exhibición Personal porque hay otros recursos de carácter ordinario y extraordinario, tales como los de apelación, de casación y extraordinario de amparo, así como el civil de presunción de muerte. Además, el procedimiento penal da a las partes la posibilidad de usar cuantos medios de prueba estimen pertinentes. Expresó el Gobierno, en relación con los casos de desaparecidos de que habló la Comisión, que se han levantado las respectivas diligencias, de

⁶¹ Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 46

⁶² Sentencia Velásquez Rodríguez, excepciones preliminares, supra 23, párrafo 91, Sentencia Godínez Cruz, excepciones preliminares, supra 25, párrafo 93, excepciones preliminares y Sentencia Fairén Garbí y Solís Corrales vs Honduras, excepciones preliminares.

oficio en unos casos y por denuncia o acusación en otros, y que, mientras no sean identificados o aprehendidos los presuntos responsables o cómplices de los delitos, el procedimiento permanece abierto.

La Comisión, a su vez, manifestó que en Honduras hubo una práctica de desapariciones que imposibilitaba agotar los recursos internos, pues no resultaron el medio idóneo para corregir los abusos que se imputaban a las autoridades ni dieron como resultados la aparición de las personas secuestradas. Afirmó la Comisión que en los casos de desapariciones el hecho de haber intentado un Hábeas corpus o un amparo sin éxito, es suficiente para tener por agotados los recursos de la jurisdicción interna si la persona detenida sigue sin aparecer, ya que no hay otro recurso más apropiado para el caso. Puntualizó que en los casos de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez se intentaron tanto recursos de exhibición personal como denuncias penales que no produjeron resultado. Señaló que el agotamiento de los recursos internos no deben entenderse como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio⁶³.

Del mismo modo, en la Sentencia Loayza Tamayo vs Perú sostuvo, la Corte estima necesario destacar que, en relación con la materia, ha establecido criterios que deben tomarse en consideración en este caso. En efecto, de los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos, a los cuales se refiere a la regla del agotamiento de los recursos internos, resulta en primer lugar, que la invocación de esta regla puede ser renunciada en forma expresa o tácita por el Estado demandado, lo que ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad (V. Asunto Viviana Gallardo y otras, decisión de 13 de noviembre de 1981], N° G 101/81. Serie A, párrafo 26) (...). En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y la prueba de su efectividad (Caso Velásquez Rodríguez, excepciones preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C N° 3, Párrafo 90)⁶⁴.

Se debe inmediatamente recordarse que cuando se habla de garantías o procesos constitucionales, de lo que se habla en definitiva es de la plena efectividad de los derechos fundamentales reconocidos (explícita o implícitamente) en la norma constitucional.

La salvación y aseguramiento del contenido constitucional de los derechos fundamentales es la finalidad suprema de toda regulación jurídica (constitucional o simplemente legal) de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. En palabras del legislador, los fines esenciales de los procesos constitucionales es “garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales” (artículo II del Código Procesal Constitucional Peruano).

Consecuentemente, esta finalidad debe serlo también de toda la teoría jurídica procesal constitucional, y de todas las tesis y formulaciones dogmáticas que puedan establecerse a su alrededor. De ahí que acierta el Tribunal Constitucional cuando afirma – de manera general – que “el juez, director del proceso, debe privilegiar razonablemente la tutela del derecho sobre las formas procesales”⁶⁵.

La consecuencia más urgente de este recordatorio es que si en un caso concreto la aplicación de la exigencia de firmeza de la resolución judicial pone en serio riesgo la salvación efectiva y oportuna del derecho fundamental agredido, deberá permitirse que el agraviado acuda directamente al proceso constitucional. En hipótesis, lo inconstitucional sería exigir al procesado

⁶³ Sentencias de Velásquez Rodríguez vs Honduras (pág. 14-15) y Godínez Cruz vs Honduras (pág. 12-14) (fondo)

⁶⁴ Sentencia Loayza Tamayo vs Perú, excepciones preliminares

⁶⁵ Exp. N 3390-20005- PHC/TC a fojas 3

que haga inviable la salvación de su derecho constitucional afectado agotando los recursos impugnativos que el proceso judicial ofrece (Castillo, 2006)

De todo lo analizado hasta el momento, se ha podido colegir que, el Hábeas Corpus tutela la libertad individual como un derecho fundamental, cuya protección debe ser incondicional frente a situaciones arbitrarias. En el cual, el afectado debe tener expedito el instrumento jurídico más eficaz e inmediato que le permita, en el más breve plazo posible, gozar de su libertad en forma plena. Por ello, se ha llegado a la conclusión que, si debe proceder el Hábeas Corpus sin agotar la instancia previa, en casos graves y de evidente ilegalidad, es decir, no debe ser exigible el requisito de “firmeza” cuando se desee acudir a la vía constitucional, haciendo uso del Hábeas Corpus para cuestionar una resolución judicial que desprenda una afectación no permisible a la libertad.

Dado que, se ha comprobado que el mencionado requisito ha actuado como barrera ante situaciones donde se exigía una solución inmediata, lo que ha ocasionado una afectación a los fines esenciales de la Constitución Peruana que se desenvuelve a través de la primacía y de la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, como lo es la libertad individual.

- ✓ **Si debe establecerse en que casos la exigencia del agotamiento de la vía judicial del instrumento constitucional de Hábeas Corpus contra resolución judicial atentaría indebidamente la libertad individual de la persona.**

Con la hipótesis anterior, se ha podido determinar que ante un caso grave y de evidente ilegalidad que afecte o amenace la libertad individual no debe ser exigible el requisito de firmeza. No obstante, es oportuno expresar que el carácter manifiesto de la vulneración de la libertad individual no es el único supuesto, a nuestro criterio, en el que se debe prescindir del carácter firme de la resolución. También hay otras situaciones, como el caso que se haya impedido al afectado acceder a los recursos que contempla el proceso judicial penal.

Siendo que, la práctica procesal penal nos ha enseñado que, por ejemplo: la huelga de trabajadores del Poder Judicial es una situación que impide la interposición de recursos pertinentes para cuestionar la validez de una resolución judicial que vulnera la libertad individual. Se conoció un caso de un procesado que se le había dictado impedimento de salida del país en un proceso penal por un delito cuya pena máxima era de dos años, sin entrar a mayores detalles, podemos decir que dicha medida era totalmente arbitraria, más aun teniendo en cuenta que dicho procesado labora y vive en el extranjero. El procesado debido a la huelga, se vio ante la imposibilidad de interponer cualquier medio de impugnación y tuvo que esperar el término de la huelga para que, por lo menos, se le suspenda dicha medida.

Otro de los supuestos donde no se debería esperar el carácter firme de la resolución que vulnera la libertad personal es aquel en el que, no obstante la utilización de los medios impugnatorios al interior del proceso, estos no son resueltos dentro del plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable. Estando en juego la vulneración, amenaza o limitación de la libertad, los medios de impugnación destinados a atacar a la misma deben ser resueltos dentro del plazo establecido por la norma o en un plazo razonable, lo contrario sería una muestra de desinterés, falta de diligencia o incapacidad del Estado por atender situaciones de suma urgencia, cuyas consecuencias no pueden ser cargadas al afectado, según Aguirre Ch, Javier, (s.f).

En el mismo sentido se ha movido el Tribunal Constitucional al manifestar que la exigencia de firmeza en las resoluciones judiciales se encuentra sujeta a limitaciones. Estas limitaciones si bien no han sido formuladas ni por el texto constitucional, ni por el legal, pueden ser definidas, *mutatis mutandis*, según las excepciones establecidas por la Convención Americana de Derechos Humanos al agotamiento de la vía jurisdiccional interna. Citado por Castillo, (2006).

Manifestó el Tribunal Constitucional que “resulta razonable que este Tribunal establezca algunos criterios al respecto, siendo orientadoras e ilustrativas las excepciones que, con relación al agotamiento de los recursos internos, señala la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (En casos tales, como: Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia del 15 de marzo de 1989).

Los criterios de no exigibilidad de carácter de firme de la resolución judicial para ser cuestionada a través de una demanda constitucional, son las siguientes:

- ✓ Que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que contempla el proceso judicial de la materia.
- ✓ Retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso.
- ✓ Que a causa del agotamiento de los recursos, pudiera convertirse en irreparable la agresión.
- ✓ Que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados ⁶⁶

Este criterio también lo encontramos en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que señalaron: .- Indudablemente que una regla de procedibilidad tan restrictiva como la prescrita en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, debe ser correctamente interpretada y morigerada en virtud del principio pro homine, que postula que los preceptos normativos deben sujetarse a una interpretación que optimice el derecho constitucional y reconozca una posición preferente a los derechos fundamentales. .- En ese sentido, frente a la mencionada disposición, se hace necesario fijar algunas excepciones, que si bien no han sido normativamente previstas en el Código Procesal Constitucional, no obsta para que, por vía jurisprudencial, este Tribunal pueda establecerlas, a fin de exceptuar a los demandantes que acrediten que la postulación de sus demandas, fue anterior a la vigencia del Código ritual constitucional, del cumplimiento de tal exigencia.

Esta postura es acorde con lo preceptuado en el artículo V, Pf.3 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237). .- En base a la aplicación análoga de las excepciones que respecto al agotamiento de los recursos internos contiene la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia sobre este tema ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio 1988, caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989). Este Tribunal puede señalar, enunciativamente, los siguientes criterios de excepción: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que contempla el proceso judicial de la materia. b) Que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso, c) que, a causa del agotamiento de los recursos, pudiera convertirse en irreparable la agresión; d) Que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados, para su resolución⁶⁷.

En conclusión, existen casos en la cual resulta necesario eliminar el requisito de firmeza para acudir a la vía constitucional a través del Hábeas Corpus, dado que, el mencionado requisito resulta ser lesivo para la libertad individual. Es en ese sentido, se ha comprobado la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento constitucional las citadas excepciones a la regla, incluyendo criterios que por regulación y jurisprudencia internacional han sido establecidas como tales, más

⁶⁶ Exp. N° 2909-2004-HC/TC, fojas 6

⁶⁷ Exp. 4107-2004-HC/TC (Leonel Richi Villar de la Cruz, Junín) y Exp. N° 2909 – 2004- HC/TC (Luis Alberto Kouri Bumachar, Lima)

aún si el Tribunal Constitucional ha mostrado a través de su jurisprudencia una postura favorable y adherida a lo señalado por las instancias internacionales.

Por otro lado, se hace hincapié que si bien; estas excepciones tienen un grado de aceptación por parte de nuestro máximo intérprete; sin embargo, estas no se encuentran incluidas de forma taxativa en nuestra Constitución; mucho menos dentro de nuestro Código Procesal Constitucional, siendo que, ello; no es óbice para que se solicite que las excepciones antes mencionadas, sean incluidas como parte de una modificatoria del artículo 4 del Código Procesal Constitucional Peruano.

CONCLUSIONES

1. Ha quedado probado que, debe proceder el Hábeas Corpus sin agotar la instancia previa, en casos graves y de evidente ilegalidad, es decir, no debe ser exigible el requisito de “firmeza” cuando se desee acudir a la vía constitucional, haciendo uso del Hábeas Corpus para cuestionar una resolución judicial que desprenda una afectación no permisible a la libertad. Dado que, el mencionado requisito ha actuado como barrera ante situaciones donde se exigía una solución inmediata, lo que ha ocasionado un daño irreparable.
2. Ha quedado probado, la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento constitucional las citadas excepciones a la regla, las mismas que por regulación y jurisprudencia internacional han sido establecidas como tales, más aún si el Tribunal Constitucional ha mostrado a través de su jurisprudencia una postura favorable y adherida a lo señalado por las instancias internacionales. Asimismo, se hace hincapié que si bien; estas excepciones tienen un grado de aceptación por parte de nuestro máximo intérprete; sin embargo, estas no se encuentran incluidas de forma taxativa en nuestro Código Procesal Constitucional, siendo que, ello; no es óbice para que se solicite que las excepciones antes mencionadas, sean incluidas como parte de una modificatoria del artículo 4 del Código Procesal Constitucional Peruano.
3. Las excepciones sugeridas para la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico, son las siguientes:
 - ✓ Cuando se haga imposible la interposición de los recursos pertinentes al interior del proceso judicial donde se dictó la resolución que vulnera la libertad individual.
 - ✓ Cuando no se observen los plazos establecidos por ley o un plazo razonable para resolver los recursos interpuestos contra la resolución que vulnera la libertad individual.
 - ✓ Cuando el agotamiento de la instancia judicial pudiera convertirse en irreparable la agresión.
 - ✓ Cuando de una resolución judicial sea evidente la vulneración manifiesta e indudable de la libertad individual.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional Peruano sea pasible de una restructuración de la siguiente forma:

ACTUAL	RESTRUCTURACIÓN
<p>(.....) El Hábeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. (....)</p>	<p>El Hábeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. El carácter de firme de la resolución no debería ser exigible en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuando se haga imposible la interposición de los recursos pertinentes al interior del proceso judicial donde se dictó la resolución que vulnera la libertad individual. ✓ Cuando no se observen los plazos establecidos por ley o un plazo razonable para resolver los recursos interpuestos contra la resolución que vulnera la libertad individual. ✓ Cuando el agotamiento de la instancia judicial pudiera convertirse en irreparable la agresión. ✓ Cuando de una resolución judicial sea evidente la vulneración manifiesta e indudable de la libertad individual.

2. Se recomienda al Tribunal Constitucional, y al Poder Judicial, tener muy en cuenta que, cuando exista una evidente y grave vulneración a la libertad individual del afectado (ejemplificada en diversas excepciones líneas arriba) no debería ser exigible el carácter firme de la resolución para admitir a trámite la demanda de Hábeas Corpus.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABAD ET AL. (2007). *El derecho Procesal Constitucional Peruano* (Vol. I). (U. G. Vega, Ed.) Lima, Perú: Biblioteca Nacional del Perú.
- ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA [A.M]. (2008). *Manual de redacción de resoluciones judiciales* (Primera ed.). Lima, Lima, Lima: Depósito legal de la Biblioteca Nacional del Perú.
- AGUIRRE CH, JAVIER . (s.f). Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales penales en el Código Procesal Constitucional.
- BELAUNDE, D. G. (1979). *El Hábeas Corpus en el Perú*. Lima, Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- BIDART ET AL. (1994). *Tratado elemental de derecho constitucional argentino* (Vol. Tomo I). Buenos Aires: Ediar.
- BOREA , A. (1996). *Evolución de las garantías constitucionales*. Lima: Grijley.
- CASTILLO, L. (Noviembre de 2006). La firmeza como requisito de procedencia de la demanda constitucional contra resoluciones judiciales. *Repositorio Institucional PIRHUA- UDEP*. Piura, Piura, Perú.
- CASTILLO, L. (FEBRERO de 2009). Algunas cuestiones en torno al Amparo contra Resoluciones Judiciales. *Repositorio Institucional PIRHUA- UDEP*. Piura, Piura, Perú.
- COLONGOS, E. (2018). Causas jurídicas que generan la declaración de improcedencia a las demandas de Hábeas Corpus en los Juzgados de Investigación Preparatoria y Unipersonas de Chachapoyas. *Tesis para obtener el título profesional de abogado*. Chachapoyas, Amazonas, Perú. Obtenido de <http://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/UNTRM/1472/CALONGOS%20VALQUI%20EUNICE%20TABITA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- COOPER, A. (1965). El 750 aniversario de la Carta Magna de 1215 en derecho, n. XXIV.
- CORNEJO Y QUIROZ.(s.f). *Monografias.com*. Obtenido de Monografias.com: <https://www.monografias.com/trabajos99/proceso-comun-nuevo-codigo-procesal-peruano/proceso-comun-nuevo-codigo-procesal-peruano>
- ETO, G. (2013). *Tratado del proceso de Amparo*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- FUERTE, C. (2007). Hábeas Corpus. *Revista de la Universidad Complutense de Madrid*.
- GACETA JURÍDICA. (2008). *Guía rápida N° 1 - Proceso de Hábeas Corpus* (Vol. Primera edición). Lima, Perú: El Búho E.I.R.L.

- GACETA JURÍDICA. (2012). *TC Gaceta Constitucional* (Vol. 52). Lima, Lima, Perú: Déposito Legal de la Biblioteca Nacional del Perú.
- GARCÍA, D. (1991). *Constitución y Política*. Lima: Eddili.
- GARCÍA Y HURTADO. (1980). *La evolución legislativa del Hábeas Corpus en el Perú, en: La nueva Constitución y el Derecho Penal*.
- GARCÍA, D. (1997). *El Hábeas Corpus en América Latina*.
- GARCÍA, D. (2001). *Derecho Procesal Constitucional*. Bogotá: Temis.
- GONZÁLES Y ARMIJO , D. (1994). *Justicia consitucional y debido proceso en ciencias penales*. San José, Costa Rica.
- LANDA , C. (2003). *Tribunal Constitucional, Estado democrático*. Lima, Perú: Palestra.
- LÓPEZ. (2011). *Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional*.
- LÓPEZ DE HARO Y LINARES . (1956). *Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional. Tomo V*, 344. Buenos Aires, Argentina: Alfa.
- MIRANDA, W. (2017). *El Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales en el Tribunal Constitucional. Tesis para obtener maestria en Derecho Constitucional*. Lambayeque, Perú. Obtenido de <http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/1356>
- NORIEGA, A. (1975). *Lecciones de Amparo*. México: Porrúa.
- ORÉ, A. (2016). *El Hábeas Corpus: Un enfoque casuístico*. (E. Búho, Ed.) Lima, Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- OSSORIO, M. (2010). *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales* (29 ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
- PONTES DE MIRANDA , C. (1972). *Historia e prática do Hábeas Corpus* (Vol. Tomo I). (Borsoi, Ed.) Río de Janeiro, Brasil.
- REYES LAUREL ET AL. (2015). *Tipos de Hábeas Corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional* (Vol. Primera Edición). Miraflores , Lima, Perú: El Búho E.I.R.L.
- ROSAS, A. J. (2015). *La nulidad del proceso penal por el Hábeas Corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional* (Primera Edición ed.). Lima, Lima, Perú: Gaceta Jurídica S.A.
- SAGUES , P. (1988). *Hábeas Corpus, Ley 23098 comentada y concordada con las normas provinciales*. Buenos Aires, Argentina: Astrea.
- SÁNCHEZ, C. (1961). *La libertad y sus problemas*. 136. Buenos Aires, Argentina.
- SULCA, W. (2018). *El Hábeas Corpus:protección jurídica a la libertad y derechos conexos en las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional 2014. Tesis para obtener el título profesional de abogado*. Chimbote, Ancash, Perú. Obtenido de http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/9818/Tesis_58736.pdf?sequence=1&isAllowed=y

VALLE RUESTA, J. (2015). Hábeas Corpus. En REYES LAUREL AL ET., *Tipos de Hábeas Corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional* (Vol. Primera Edición). Miraflores , Lima, Perú: El Búho E.I.R.L.

VALLETTA, L. (2014). *Diccionario Jurídico* (8 Edición ed., Vol. Tomo II). Buenos Aires , Argentina : Valletta Ediciones S.R.L.

VELÁSQUEZ , R. (2007). *Manual de Derecho Procesal Constitucional*. Lima: Ediciones Jurídicas.

XIBRAS, J. (1957). *Curso de Derecho Constitucional. Tomo I* . Barcelona, España.

ANEXOS

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA

Matriz Básica de Consistencia

Título del Proyecto: El Hábeas Corpus y el agotamiento de la instancia judicial del Proceso Común

Nombre del tesista: María Roxana Alberca Yanayaco

PROBLEMA	PREGUNTAS	HIPÓTESIS	OBJETIVOS
GENERAL	¿Debe proceder el Hábeas Corpus contra resolución judicial sin agotar la instancia judicial del proceso común cuando exista una evidente vulneración a la libertad individual?	Resulta pertinente y eficaz que el Hábeas Corpus contra resolución judicial proceda sin agotar la instancia judicial del proceso común en casos graves y de evidente ilegalidad, puesto que de lo contrario se vulnera la libertad individual de la persona.	Analizar si debe proceder el Hábeas Corpus contra resolución judicial sin agotar la instancia judicial ordinaria cuando exista una grave y evidente vulneración a la libertad individual de la persona.

PROBLEMA	PREGUNTAS	HIPÓTESIS	OBJETIVOS
ESPECÍFICA	<p>¿Debe establecerse los casos en que la exigencia del agotamiento del proceso común estipulado para el instrumento constitucional del Hábeas Corpus contra resolución judicial podría atentar indebidamente contra la libertad individual de la persona?</p>	<p>Resulta posible que se deba establecer los casos en que la exigencia del agotamiento de la vía judicial del instrumento constitucional de Hábeas Corpus contra resolución judicial atentaría indebidamente la libertad individual de la persona.</p>	<p>Determinar si debe establecerse los casos en que la exigencia del agotamiento de la instancia judicial del instrumento constitucional del Hábeas Corpus contra resolución judicial podría atentar indebidamente contra la libertad individual de la persona.</p>

APÉNDICE

Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto de San José, Costa Rica)
Artículo 46

Para que petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión, se requerirá:

- a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.
- b) Que sea presentada dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que el presente lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
- c) Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
- d) Que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad

Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando:

- b) No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o se haya impedido de agotarlos, y
- c) Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras
(Excepciones preliminares)

Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como ya lo señaló la Corte en su Sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirmó: La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención.

En efecto, según ella, los estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo del debido proceso legal (art. 8.1), de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art.1)

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras

Sentencia del 29 de julio 1988

(Fondo)

El artículo 46 de la Convención remite “a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resultan las excepciones contempladas en el artículo 46.2. Que, sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o Hábeas Corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad.

Para el Gobierno, los recursos de la jurisdicción Hondureña no se agotan con el Recursos de Exhibición Personal porque hay otros recursos de carácter ordinario y extraordinario, tales como los de apelación, de casación y extraordinario de amparo, así como el civil de presunción de muerte. Además, el procedimiento penal da a las partes la posibilidad de usar cuantos medios de prueba estimen pertinentes. Expresó el Gobierno, en relación con los casos de desaparecidos de que habló la Comisión, que se han levantado las respectivas diligencias, de oficio en unos casos y por denuncia o acusación en otros, y que, mientras no sean identificados o aprehendidos los presuntos responsables o cómplices de los delitos, el procedimiento permanece abierto.

La Comisión, a su vez, manifestó que en Honduras hubo una práctica de desapariciones que imposibilitaba agotar los recursos internos, pues no resultaron el medio idóneo para corregir los abusos que se imputaban a las autoridades ni dieron como resultados la aparición de las personas secuestradas. Afirmó la Comisión que en los casos de desapariciones el hecho de haber intentado un Hábeas corpus o un amparo sin éxito, es suficiente para tener por agotados los recursos de la jurisdicción interna si la persona detenida sigue sin aparecer, ya que no hay otro recurso más apropiado para el caso. Puntualizó que en el caso de Manfredo Velásquez se intentó tanto recursos de exhibición personal como denuncias penales que no produjeron resultado. Señaló que el agotamiento de los recursos internos no deben entenderse como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Godínez Cruz vs Honduras

Sentencia del 20 de febrero de 1989

(Fondo)

El artículo 46 de la Convención remite “a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resultan las excepciones contempladas en el artículo 46.2. Que, sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o Hábeas Corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad.

Para el Gobierno, los recursos de la jurisdicción Hondureña no se agotan con el Recursos de Exhibición Personal porque hay otros recursos de carácter ordinario y extraordinario, tales como los de apelación, de casación y extraordinario de amparo, así como el civil de presunción de muerte. Además, el procedimiento penal da a las partes la posibilidad de usar cuantos medios de prueba estimen pertinentes. Expresó el Gobierno, en relación con los casos de desaparecidos de que habló la Comisión, que se han levantado las respectivas diligencias, de oficio en unos casos y por denuncia o acusación en otros, y que, mientras no sean identificados o aprehendidos los presuntos responsables o cómplices de los delitos, el procedimiento permanece abierto.

La Comisión, a su vez, manifestó que en Honduras hubo una práctica de desapariciones que imposibilitaba agotar los recursos internos, pues no resultaron el medio idóneo para corregir los abusos que se imputaban a las autoridades ni dieron como resultados la aparición de las personas secuestradas. Afirmó la Comisión que en los casos de desapariciones el hecho de haber intentado un Hábeas corpus o un amparo sin éxito, es suficiente para tener por agotados los recursos de la jurisdicción interna si la persona detenida sigue sin aparecer, ya que no hay otro recurso más apropiado para el caso. Puntualizó que en el caso de Saúl Godínez se intentaron tanto recursos de exhibición personal como denuncias penales que no produjeron resultado. Señaló que el agotamiento de los recursos internos no deben entenderse como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Fairén Garbí y Solís Corrales vs Honduras

(Excepciones Preliminares)

Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como ya lo señaló la Corte en su Sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirmó: La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención.

En efecto, según ella, los estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo del debido proceso legal (art. 8.1), de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art.1) .

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Loayza Tamayo vs Perú

Sentencia de 17 de setiembre de 1997

(Fondo)

La Corte estima necesario destacar que, en relación con la materia, ha establecido criterios que deben tomarse en consideración en este caso. En efecto, de los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos, a los cuales se refiere a la regla del agotamiento de los recursos internos, resulta en primer lugar, que la invocación de esta regla puede ser renunciada en forma expresa o tácita por el Estado demandado, lo que ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad (V. Asunto Viviana Gallardo y otras, decisión de 13 de noviembre de 1981], N° G 101/81. Serie A, párrafo 26) (...). En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y la prueba de su efectividad (Caso Velásquez Rodríguez, excepciones preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C N° 3, Párrafo 90).

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Godínez Cruz vs Honduras

(Excepciones Preliminares)

Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como ya lo señaló la Corte en su Sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirmó: La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención.

En efecto, según ella, los estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo del debido proceso legal (art. 8.1), de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art.1).

Sentencia del Tribunal Constitucional
Exp. 4107-2004-HC/TC
Caso Leonel Richi Villar de la Cruz, Junín

Indudablemente que una regla de procedibilidad tan restrictiva como la prescrita en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, debe ser correctamente interpretada y morigerada en virtud del principio pro homine, que postula que los preceptos normativos deben sujetarse a una interpretación que optimice el derecho constitucional y reconozca una posición preferente a los derechos fundamentales.

En ese sentido, frente a la mencionada disposición, se hace necesario fijar algunas excepciones, que si bien no han sido normativamente previstas en el Código Procesal Constitucional, no obsta para que, por vía jurisprudencial, este Tribunal pueda establecerlas, a fin de exceptuar a los demandantes que acrediten que la postulación de sus demandas, fue anterior a la vigencia del Código rituario constitucional, del cumplimiento de tal exigencia. Esta postura es acorde con lo preceptuado en el artículo V, Pf.3 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237).

En base a la aplicación análoga de las excepciones que respecto al agotamiento de los recursos internos contiene la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia sobre este tema ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio 1988, caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989). Este Tribunal puede señalar, enunciativamente, los siguientes criterios de excepción: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que contempla el proceso judicial de la materia. b) Que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso, c) que, a causa del agotamiento de los recursos, pudiera convertirse en irreparable la agresión; d) Que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados, para su resolución.

Sentencia del Tribunal Constitucional
Exp. N° 2909 – 2004- HC/TC
Luis Alberto Kouri Bumachar, Lima

Si bien el Código Procesal Constitucional exige que la resolución judicial materia de objeción constitucional debe ser firme, no ha previsto en su normativa excepciones a dicha regla, por lo que resulta razonable que este Tribunal establezca algunos criterio al respecto, siendo orientadoras e ilustrativas las excepciones que, con relación al agotamiento de recursos internos, señala la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia que sobre este tema ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio 1988, caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989) Entre las cuales cabe destacar, a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que contempla el proceso judicial de la materia. b) Que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso, c) que, a causa del agotamiento de los recursos, pudiera convertirse en irreparable la agresión; d) Que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados, consideraciones que resultan acordes con el artículo III, párrafo 3, del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.